CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO

OBSERVACIONES Y ALEGATOS FINALES DEL ESTADO MEXICANO

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2018.

ÍNDICE

ÍNDICE	i
I. POSICIONAMIENTO FINAL DEL ESTADO MEXICANO EN TORNO AL CASO.	5
A. Alcance del reconocimiento de responsabilidad.	5
B. Contexto en el que se desarrollan los hechos de este caso.	7
a) Contexto sobre actividades del crimen organizado.	7
b) Vestimenta tipo militar.	8
c) Operativo Conjunto Chihuahua.	9
d) Asesinato de los hermanos Alvarado Sáenz.	11
C. Posición del Estado frente a la alegada desaparición forzada.	12
D. Amenazas y hostigamiento y otras violaciones conexas.	18
E. Investigaciones a cargo del Estado.	19
F. Reparaciones solicitadas.	25
II. OBSERVACIONES DEL ESTADO EN TORNO A LAS DECLARACIONES RENDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA, A <i>AFFIDÁVITS</i> ENVIADOS POR LA REPRESENTACIÓN Y RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS JUECES DE LA CORTE IDH.	26
A. Observaciones a las declaraciones de testigos desahogadas durante la audiencia.	26
a) Observaciones a declaraciones de la testigo María de Jesús Alvarado Espinoza.	26
i. Aseguramiento de la camioneta.	27
ii. Supuesta afirmación de que las personas desaparecidas se encontraban en el 35° Batallón.	28
iii. General Lohmann.	29

iv. Contexto de presencia del Ejército en Buenaventura.	31
v. Declaraciones vertidas por la testigo.	34
vi. Situación de Élfego José Luján Ruíz.	35
b) Observaciones a las declaraciones del testigo Jaime Alvarado Herrera.	36
i. Allanamiento de morada del testigo.	36
ii. Asesinato de Fabián Alvarado Herrera.	38
c) Observaciones al testimonio vertido por Mariana Colín Ayala.	40
B. Observaciones a testimonios escritos presentados por la Representación.	44
a) Observaciones al testimonio vertido por Sandra Luz Rueda Quezada.	44
b) Observaciones a las declaraciones escritas de Deisy Alvarado Espinoza, Mitzy Paola Alvarado Espinoza y Nitza Sitlaly Alvarado Espinoza.	46
c) Observaciones a las declaraciones del José Ángel Alvarado Fabela.	47
d) Observaciones a la declaración de Salomón Baltazar Samayoa.	48
e) Observaciones a la declaración de Rosa Olivia Alvarado Herrera.	50
f) Observaciones a la declaración del señor Adrián Alvarado Reyes.	51
g) Observaciones a la declaración del señor Alan Rafael Alvarado Reyes.	52
h) Observaciones a la declaración de Obdulia Espinoza Beltrán.	52
C. Observaciones a Peritajes orales.	53
a) Observaciones al peritaje presentado por Federico Andreu.	53
b) Observaciones al peritaje presentado por el Dr. Salvador Salazar Gutiérrez.	55
c) Observaciones al peritaje presentado por el Estado mexicano.	57
D. Observaciones a los Peritajes escritos enviados por la Representación y a los amici	

curiae.	61
a) Observaciones al peritaje presentado por Carlos Martín Beristain.	62
b) Observaciones al peritaje presentado por el Dr. Alejandro Madrazo Lajous	63
c) Observaciones al peritaje presentado por el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense	66
E. Observaciones a los alegatos finales de la representación.	67
a) Investigaciones.	67
b) Valoración de pruebas.	69
c) La carga de la prueba recae en la Representación.	71
d) Investigaciones con perspectiva de género y responsabilidad por violaciones a la Convención Belém Do Pará.	75
e) Ley de Seguridad Interior.	77
F. Observaciones a la línea argumentativa de la Comisión.	81
a) Contexto de desaparición forzada.	81
b) Testimonios de familiares.	86
G. Respuestas y observaciones sobre las preguntas formuladas por los jueces durante la audiencia pública.	88
a) Respuesta a la pregunta realizada por Su Excelencia, el Juez Patricio Pazmiño Freire.	88
i. Aseguramiento de uniformes en el Ejido de Benito Juárez.	88
ii. Análisis de riesgo y medidas de seguridad.	90
iii. Ley de Seguridad Interior.	95
iv. Informes periódicos ante instancias internacionales en materia de desaparición	

forzada.	95
v. Supuesta llamada de Nitza Paola Alvarado Espinoza.	96
vi. Código de Justicia Militar.	98
b) Respuesta a las preguntas de su Excelencia, el Juez Sierra Porto.	100
III. PETITORIOS	104
IV. ANEXOS.	105

CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO

1. De conformidad con el artículo 56, párrafo 1, del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte Interamericana”, “Corte” o “Corte IDH”), así como la resolución del 23 de marzo de 2018 de este Tribunal Interamericano, los Estados Unidos Mexicanos (“Estado mexicano”, “Estado” o “México”), se permiten formular sus observaciones finales en torno al presente caso, así como sus alegatos en respuesta a lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión IDH”) y la representación de las personas desaparecidas y sus familiares (“Representación”) durante las audiencias públicas celebradas los días 26 y 27 de abril de 2018.

2. En este tenor, el Estado mexicano dividirá en dos secciones el presente escrito: I) posicionamiento final del Estado mexicano en torno al caso; y II) observaciones del Estado sobre el desarrollo de la audiencia pública del 26 y 27 de abril de 2018, y a *affidávits* enviados por la Representación.

I. POSICIONAMIENTO FINAL DEL ESTADO MEXICANO EN TORNO AL CASO.**A. Alcance del reconocimiento de responsabilidad.**

3. Respecto del alcance del reconocimiento de su responsabilidad internacional, se reiteran los dos conceptos que son reconocidos por el Estado.

- Primeramente, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que al momento de los hechos no existía una legislación en materia de desaparición forzada que fuera compatible con los estándares interamericanos, por lo que no se contaba con un tipo penal en el ordenamiento interno que fuera adecuado; y
- En segundo lugar, el Estado mexicano reconoce que las investigaciones en el presente

caso fueron llevadas en cierto momento por la jurisdicción militar, con lo cual se contravinieron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 2 del mismo instrumento, en razón de que la legislación de ese entonces permitía el conocimiento de los hechos por parte del fuero militar.

4. Al respecto, en el caso *Tarazona Arrieta y otras vs. Perú*, la Representación argumentó que el Estado no contaba con legislación respecto del uso de la fuerza al momento en que ocurrieron los hechos, además de que el marco vigente en ese momento no era compatible con la CADH. Por su lado, esa Honorable Corte concluyó que efectivamente al momento de los hechos, el Estado del Perú no contaba con un marco jurídico respecto del uso de la fuerza; sin embargo, no ordenó una medida de reparación, ya que el Estado había llevado a cabo diversas modificaciones legislativas.

5. En el presente caso, si bien el Estado no contaba con un marco legislativo en materia de desaparición forzada adecuado al momento de los hechos, actualmente ya cuenta con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual ha sido reconocida por distintos actores, incluyendo la CIDH, como compatible con los estándares interamericanos.

6. En consecuencia, el Estado ya ha reparado su violación al artículo 2 de la CADH, y no resulta necesario que esta Honorable Corte se pronuncie al respecto.

7. De manera similar, respecto al conocimiento que tuvo el fuero militar por los hechos del presente caso, debido a que en ese momento, así lo permitía la legislación mexicana, se resalta que con la reforma al Código de Justicia Militar, realizada en el año 2014, hoy en día está garantizado que en las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por personal de las fuerzas armadas sean investigadas en el fuero civil. Asimismo, actualmente la investigación del presente caso se encuentra en el fuero civil, en el área especializada de la PGR en materia de investigación del delito de desaparición forzada de personas y cometida por particulares.

8. En este sentido, el Estado mexicano considera que ya ha atendido la incompatibilidad

que en su momento existió entre la legislación mexicana y los estándares interamericanos. Por lo tanto, se considera que no resulta necesario que esa Corte IDH se pronuncie sobre dicha incompatibilidad en el presente caso, al haberse ya subsanado por el Estado.

B. Contexto en el que se desarrollan los hechos de este caso.

a) Contexto sobre actividades del crimen organizado.

9. Para el Estado mexicano, la situación de seguridad en el Estado de Chihuahua en la época de los hechos, derivada de las actuaciones ilícitas a cargo de la delincuencia organizada y las tácticas que utilizaban para evadirse de la acción de la justicia, debe ser tomada en consideración para los hechos del presente caso, por dos razones principales: (i) esta realidad forma parte innegable del contexto que se vivía en el estado de Chihuahua en la época de los hechos, por lo cual no debe evadirse; y (ii) existen elementos específicos de la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, que se vinculan con las actividades ilícitas propias de la delincuencia organizada.

10. Respecto del contexto de seguridad, dada su condición de estado fronterizo, Chihuahua se constituye como uno de los principales puntos de tránsito de drogas hacia los Estados Unidos de América y, en sentido inverso, de ingreso de armas, municiones, numerario y contrabando.

11. La conjugación de factores geográficos, sociales, económicos e incluso culturales, han hecho factible el establecimiento y operación de actividades por parte de la delincuencia organizada.

12. Benito Juárez, lugar en donde ocurrió la desaparición de este caso, se localiza en el municipio de Buenaventura y se ha caracterizado por ser un bastión de “La Línea”, brazo armado de la organización “Cartel de Juárez”, que fuera liderada por la familia *Carrillo Fuentes*. Se tiene conocimiento que en este lugar se ha llegado a almacenar droga y armamento; algunos pobladores participan con la organización en este tipo de actividades, ya sea por simpatía o por temor.

13. Para la temporalidad de los hechos del presente caso, el reforzamiento del Operativo Conjunto Chihuahua en el municipio de Juárez, originó un corrimiento tanto de la violencia como de los principales líderes de “La Línea” hacia esta zona noroeste de Chihuahua, como sitio de resguardo y afianzamiento de su hegemonía para fincar su estructura y operaciones delictivas.

14. Tal como lo demuestra el estudio realizado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, el cual fue remitido a esa Corte IDH en la contestación del Estado como prueba documental, los integrantes de estas organizaciones, particularmente los integrantes de “La Línea” y la pandilla de “Los Aztecas”, se vinculan con ilícitos como homicidio, lesiones, extorsión, secuestros, quema de inmuebles y actividades ilícitas conocidas como “levantones”.

15. Al margen de lo anterior, se pone de relieve que el 17 de mayo de 2018 el Estado mexicano detuvo a Carlos Arturo N. alias “El 80”, principal líder del Cartel de “La Línea”. Durante el aseguramiento se le incautó, entre otras cosas, equipo táctico y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas¹.

b) Vestimenta tipo militar.

16. Entre los años 2008 y 2010, como parte de la forma de actuar de las organizaciones delictivas mencionadas, se encontraba el uso de uniformes, insignias y pertrechos falsos, que generalmente eran similares a los pertenecientes a las distintas dependencias federales inherentes al ámbito de la seguridad pública —lo cual incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Armada de México, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, así como de corporaciones locales de policía, con el objetivo de pasar desapercibidos y poder desarrollar sus actividades con un menor riesgo, al mimetizarse con las

¹ Se adjunta link sobre la conferencia de prensa correspondiente a la detención: <https://www.pscp.tv/w/1YqGoLpbwdAJv>

autoridades desplegadas en ese momento en dicho territorio.

17. En este sentido, existe un claro contexto en Chihuahua, durante la época de los hechos de este caso, que apunta al uso de uniformes apócrifos, incluyendo pertrechos y vestimenta tipo militar, por parte de las organizaciones delictivas previamente mencionadas. Esto se encuentra corroborado por el estudio realizado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI); el peritaje presentado por el Perito Carlos Rodríguez Ulloa; la declaración escrita de José Emilio Serrano Santiago; la declaración desahogada por la agente del Ministerio Público Mariana Colín; el propio contenido de la investigación a cargo de la PGR en torno a los hechos del presente caso; y las averiguaciones previas que existen tanto a nivel federal como local por la puesta a disposición de integrantes de organizaciones delictivas por el uso de este tipo de vestimenta.

18. En cumplimiento de las obligaciones de las autoridades mexicanas para atender la anterior problemática, el Estado ha reportado en su escrito de contestación que entre el año 2006 y 2015 se han logrado decomisar 2485 uniformes bajo el control de la delincuencia organizada, y se ha detenido a 1575 personas por el uso de vestimenta tipo militar.

19. Consecuentemente, de lo antes expuesto, podemos advertir que las actuaciones ilícitas a cargo de la delincuencia organizada, que incluyen homicidios y la privación ilegal de la libertad, llamados “levantones”, y las tácticas que utilizaban para evadirse de la acción de la justicia, tales como el uso de indumentaria apócrifa de fuerzas armadas, generaron un evidente temor e incertidumbre en la población del estado de Chihuahua.

c) Operativo Conjunto Chihuahua.

20. El 28 de marzo de 2008 dio inicio el “Operativo Conjunto Chihuahua”, con el objetivo de combatir la inseguridad pública, así como el elevado número de homicidios vinculados con la delincuencia organizada; no obstante, este operativo se enfocó especialmente en Ciudad Juárez, y no a la localidad en la que se llevaron a cabo los hechos del presente caso.

21. El Operativo Conjunto Chihuahua se llevó a cabo como una estrategia gubernamental excepcional, que atendía a la necesidad y obligación del Estado mexicano de proteger a la población en general, y cuya finalidad primordial fue regresar a la población de aquella entidad federativa, la paz y seguridad, la cual paulatinamente les fue arrebatada por las organizaciones criminales que operan en estos territorios, seguido por acciones para reconstruir la vida en comunidad y la cohesión social. Asimismo, durante el Operativo se implementó un servicio de atención y seguimiento a quejas, que permitía atender cualquier incidente o consideración que surgiera por parte de población.

22. Ahora bien, la Representación y la CIDH plantean un escenario inexacto en el que, como parte del Operativo Conjunto Chihuahua, el Ejército mexicano, y particularmente el 35° Batallón, cometería violaciones de derechos humanos en contra de la población.

23. México reconoce los importantes retos que enfrenta en materia de derechos humanos. No escapa a su convicción y obligaciones, las implicaciones y consecuencias de la desaparición de personas y otras graves violaciones a derechos humanos. Particularmente, el Estado mexicano comprende la gravedad y el carácter pluriofensivo de este delito, y es precisamente dicho reconocimiento lo que lo ha llevado a intensificar sus esfuerzos para combatir la desaparición forzada de personas.

24. Al respecto, contrario a otros casos que ha conocido esta Honorable Corte, incluso respecto de México, el Estado mexicano sostiene que del contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, no se desprende evidencia que apunte a la existencia de una política del Estado para cometer ilícitos en perjuicio de la población en general; contrariamente, el fin de éste era precisamente el opuesto: lograr paz y seguridad en la región desarticulando a los miembros de la delincuencia organizada con alta capacidad de operación ilícita y violenta.

25. Asimismo, respecto a las alegaciones presentadas por la CIDH y la Representación, el Estado resalta que el 35° Batallón no formaba parte directamente del Operativo Conjunto Chihuahua y no fue instalado derivado del mismo. Contrario a lo que sostiene la CIDH y la

Representación, dicha Unidad ya se encontraba establecida con antelación y su sede se encuentra de manera permanente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

26. A reserva de lo anterior, el Estado observa que en efecto existieron algunos integrantes de dicha Unidad que incurrieron en conductas alejadas de la ley. Sobre ello, el Estado mexicano debe ser enfático en cuatro cuestiones determinantes: (i) éstos actuaron de manera aislada y alejándose de los objetivos primordiales y naturaleza misma de sus funciones; (ii) los elementos que actuaron al margen de la ley son identificables, sin que de ello pueda derivarse que el 35° Batallón en su conjunto incurrió en conductas ilícitas; (iii) todos y cada uno de los elementos de dicho Batallón quienes cometieron algún ilícito o que se presume pudieron haberlo cometido, se encuentran hoy bajo proceso penal y ya han sido juzgados conforme a derecho; y (iv) No existen elementos de prueba que permitan vincular que alguno o varios de los agentes militares que actuaron al margen de la ley, estuvieran relacionados con los hechos del caso.

27. El Estado debe resaltar el segundo punto mencionado, debido a que el 35° Batallón en su conjunto y los elementos que lo integraron sirvieron debidamente a sus funciones y en estricto apego a derecho; sin que las conductas alejadas de la ley que pudieron haber cometido algunos miembros puedan estigmatizar o responsabilizar al resto de los integrantes de dicha Unidad, a las instituciones mexicanas o al Estado mexicano por los hechos del presente caso.

28. Se resalta que precisamente el mensaje institucional que el Estado mexicano reitera al investigar y sancionar dichas actuaciones es de rechazo y no tolerancia, toda vez que se apartan de los objetivos y razón de ser de las respuestas que ha el Estado ha empleado para proteger a la población en general.

d) Asesinato de los hermanos Alvarado Sáenz.

29. De manera adicional al contexto general que presenta el Estado mexicano respecto a las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y el uso de vestimenta tipo militar por parte de sus integrantes; se considera que el asesinato de Rafael Alvarado Sáenz (padre de Rocío Irene Alvarado Reyes) y Alfredo Alvarado Sáenz (tío de Rocío Irene Alvarado Reyes), ocurrido poco

más de un año antes de la desaparición alegada en el presente caso, constituye un antecedente inmediato a los hechos, por lo cual debe ser tomado como parte del contexto de este caso.

30. Al respecto, se resalta que existen elementos para relacionar el asesinato de los hermanos Alvarado Sáenz con actividades de la delincuencia organizada, destacándose los siguientes dos elementos de prueba:

- La declaración de Patricia Reyes Rueda, madre de Rocío Irene Alvarado Sáenz, emitida el 10 de junio de 2015, en la cual señaló que su *esposo trabajó para un narcotraficante de la zona*; y
- La nota periodística firmada por Leobardo Alvarado (familiar de las personas desaparecidas), quien señaló lo siguiente: *“El año pasado asesinaron al Papá de Rocío Irene y al tío de ella. Ambos familiares míos y de nombres: Rafael Alvarado Sáenz y Alfredo Alvarado Sáenz. Es necesario que sepan que fueron asesinados porque sí estaban involucrados en cuestiones de narcotráfico”*.

31. Al respecto, se resalta que lo anterior ha tornado relevancia para la línea de investigación relacionada con la probable responsabilidad de miembros de la delincuencia organizada, que actualmente se sigue por parte de la PGR, respecto de los hechos de este caso, tal como fue expresado por la testigo Mariana Colín durante la audiencia pública del caso.

C. Posición del Estado frente a la alegada desaparición forzada.

32. El Estado considera que la desaparición forzada alegada en el presente caso no es atribuible al Estado mexicano, en tanto no existen elementos suficientes para considerar que ésta fue perpetrada por agentes estatales.

33. A efectos de determinar la existencia de una desaparición forzada, fundado en las obligaciones convencionales en la materia esa Corte IDH ha resaltado los siguientes tres elementos: (i) la privación de la libertad de una persona; (ii) la intervención directa de agentes estatales o por aquiescencia o tolerancia de éstos; y (iii) la negativa de reconocer la detención y

de revelar la suerte o el paradero de la persona afectada.

34. Respecto del primer elemento, el Estado no niega la privación de la libertad de las tres personas desaparecidas el 29 de diciembre de 2009, tal como lo constata el material probatorio del caso. Particularmente, las declaraciones de Patricia Reyes y Obdulia Espinoza indican que un grupo de individuos que portaban vestimenta tipo militar, privó de la libertad a sus seres queridos.

35. Asimismo, se cuenta con la declaración de Alma Griselda Marmolejo Ramírez, quien señala que sus hijos presenciaron la desaparición de Nitzia Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera. Aunque éstos indicarían que los individuos que privaron de la libertad a las personas desaparecidas vestían de civiles, sí concuerdan con el hecho de la detención. Por lo cual, no existe controversia respecto al primer requisito convencional y jurisprudencial.

36. En relación con el segundo requisito, consistente en “la intervención directa de agentes estatales o por aquiescencia o tolerancia de éstos”, el Estado mexicano sostiene que no existen pruebas directas ni pruebas circunstanciales suficientes para concluir que el grupo de individuos que privaron de la libertad a las personas desaparecidas eran agentes estatales o bien que hubo elementos que apuntaran a la aquiescencia en su comisión.

37. A reserva de los rubros adicionales que han sido abordados por el Estado mexicano en su contestación, éste se referirá particularmente a los siguientes tres rubros concretos: (i) contexto y presencia militar en el Ejido Benito Juárez; (ii) las declaraciones de familiares de las personas desaparecidas; y (iii) las declaraciones de funcionarios públicos.

38. En relación con el **contexto**, el Estado ya ha referido previamente la alta presencia de la delincuencia organizada en Chihuahua, y particularmente en la comunidad en la que ocurrieron los hechos de este caso. Asimismo, se resaltó la práctica de al menos dos grupos delincuenciales que llevaban a cabo actividades delictivas de privación ilegal de la libertad, conocidas como “levantones”. Particularmente, se ha destacado que, como una de las tácticas de dichos grupos, se hacía uso de vestimenta y pertrechos falsos tipo militar para la comisión de actividades

ilícitas.

39. En adición a lo anterior, si bien el Operativo Conjunto Chihuahua implicaba una acción coordinada entre autoridades locales y federales, éste se dirigió específicamente a la atención de Ciudad Juárez, y no a la zona en que se llevaron a cabo los hechos de este caso. Expresamente, el Batallón 35, que ha sido señalado por la CIDH y la Representación, no formaba parte directa del Operativo y no fue instalado derivado del mismo. Contrariamente, dicha Unidad ya se encontraba establecida con antelación y su sede se encuentra de manera permanente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

40. Adicionalmente, si bien elementos adscritos al 35 Batallón estuvieron presentes en el Municipio de Buenaventura, días antes de los hechos, se tiene información precisa sobre las funciones que desempeñaron (consistentes en el establecimiento de un Puesto de Control Móvil en Buenaventura) y el hotel “Los Arcos” en el que pernoctaron y abandonaron el 26 de diciembre de 2009, es decir 3 días antes de ocurridos los hechos de este caso. Por lo que el día de los hechos no se encontrarían presentes en el Ejido Benito Juárez. Ello se encuentra corroborado además por (i) las declaraciones de elementos del 35 Batallón; (ii) las declaraciones de funcionarios locales y habitantes del Ejido; (iii) la declaración rendida de manera escrita ante esa Corte, a cargo de Marín Adrián Lasso Carbajal; así como (iv) por el registro de salida de los elementos militares a la Policía del Ejido. De igual forma, el día en que ocurrió la desaparición no se registró la salida de personal militar con destino al Ejido Benito Juárez, mientras que sí se cuenta con registro de otros patrullajes y acciones diversas.

41. De lo anterior, se sostiene que en la fecha en que ocurrió la desaparición, no hubo personal militar en esa localidad.

42. En relación con las **declaraciones de los familiares** de las personas desaparecidas, se destaca que los únicos testigos presenciales del momento de la desaparición son las señoras Patricia Reyes y Obdulia Espinoza, y los dos hermanos de Rocío Irene Alvarado Reyes.

43. Al respecto, el Estado resalta los siguientes aspectos:

- De frente al contexto que imperaba en Chihuahua durante los hechos del caso, el uso de vestimenta tipo militar no es suficiente para confirmar que los sujetos que detuvieron a las tres personas desaparecidas eran agentes estatales. Contrariamente, existen fuertes indicios del uso de este tipo de vestimenta por parte de grupos de la delincuencia organizada que se encontraban en la zona en la que se llevaron a cabo los hechos.
- Existen otros elementos específicos de este caso que sugieren la posible responsabilidad de grupos delictivos. Particularmente, el Estado destaca (i) el asesinato del padre de Rocío Irene, aproximadamente un año antes de los hechos de este caso, quien habría sido “levantado” presuntamente por miembros de la delincuencia organizada; (ii) la declaración de Patricia Reyes Rueda, madre de Rocío Irene, quien señala que su hija tenía intención de esclarecer los hechos sobre el asesinato de su padre y tenía contacto con un presunto integrante de un grupo delincuencial, a lo cual su madre le habría pedido no ponerse en una situación de riesgo; (iii) existe el antecedente sobre la aportación de información por parte de Rocío Irene y Nitza Paola a elementos de la Policía Federal, relacionada con actividades que desarrollaba un grupo delincuencial, lo cual habría ocurrido aproximadamente un mes antes de ocurrida la desaparición (principios de noviembre de 2009), cuestión que se considera pudo haber colocado a las dos personas en una situación de riesgo real de frente a los intereses posiblemente trastocados por el grupo delincuencial; y (iv) existen otras menciones formuladas por familiares en torno a supuestas actividades ilícitas, respecto de las cuales el Estado se remite a su escrito de contestación.
- De los anteriores elementos, el Estado observa que las personas desaparecidas se encontraban en una situación de riesgo, expuestas a la actuación de al menos dos grupos de la delincuencia organizada. Inclusive, puede observarse a lo largo de varios años, cómo diversos integrantes de esta familia han sido víctimas de grupos de la delincuencia organizada, de manera repetida, incluyendo el reciente y lamentable asesinato de Fabián Alvarado Herrera.
- Obra dentro del expediente del caso, la declaración de una vecina del lugar de donde

ocurrió la desaparición de Nitza Paola y José Ángel, que refiere que los sujetos que pudieron observar sus hijos vestían de civil.

- Con lo anterior, el Estado no controvierte o brinda una interpretación distinta al contenido de las declaraciones de los familiares de las personas desaparecidas. Contrariamente, se considera que es un elemento importante el hecho de que los anteriores testigos identifiquen que algunos de los individuos que detuvieron a sus familiares portaban vestimenta verde, y otros vestimenta color arena.
- De esta manera, el hecho de que el grupo que llevó a cabo la detención estuviera integrado por individuos con dos colores distintos de vestimenta, e incluso que algunos pudieran estar vestidos de civiles, no es suficiente para acreditar la participación de elementos militares, quienes en el desarrollo de sus funciones cuentan con un tipo de vestimenta homologada.
- Al respecto, el uniforme utilizado por elementos del 35 Batallón al momento de la desaparición no corresponde con la variedad descrita por los testigos presenciales. Lo anterior se encuentra corroborado con las pruebas documentales que ha enviado el Estado a esa Corte IDH, en las que se identifica que el uniforme que era utilizado oficialmente durante la fecha de la desaparición era de un solo color, siendo éste el verde.
- Por otro lado, el mismo día en que ocurrió la desaparición, un agente policial, quien fue notificado por un amigo de las personas desaparecidas, declaró que mientras realizaban acciones de búsqueda cerca de los lugares de los hechos, encontraron una fogata en donde estaban siendo quemados un radio, una pistola y un chaleco, las dos últimas con insignias oficiales de corporaciones de seguridad.
- A lo anterior, se suma la ausencia de presencia militar en el Ejido durante el día en que ocurrieron los hechos, sustentada en diversos elementos de convicción.

44. A la luz de lo anterior, el Estado mexicano sostiene que de las declaraciones de los familiares únicamente es posible extraer que los individuos que desaparecieron a sus seres queridos portaban vestimenta tipo militar; de lo cual no es posible concluir que dichos

individuos eran efectivamente agentes estatales.

45. Respecto a las supuestas **menciones de funcionarios estatales** que habrían informado a los familiares de las personas desaparecidas, que sus seres queridos se encontrarían en el 35 Batallón, el Estado controvierte dichas afirmaciones.

46. Al respecto, el Estado mexicano resalta lo siguiente:

- Las declaraciones de los funcionarios estatales son consistentes en negar que hubieran informado a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos.
- Las mismas declaraciones son consistentes en señalar que jamás les constó que la detención hubiera sido llevada a cabo por agentes estatales o el paradero de las personas desaparecidas. Además de que del acervo probatorio con el que se cuenta sobre el caso, no existen elementos objetivos que indiquen que dichos funcionarios pudieran conocer el paradero de las personas desaparecidas.
- Contrario a ello, los funcionarios que han sido identificados por la CIDH en su informe de fondo señalan que debido a que la denuncia de los hechos se llevó a cabo afirmando que los individuos que llevaron a cabo la detención eran militares (en razón del tipo de vestimenta que utilizaban), éstos expresaron que “en su caso” sus familiares podrían encontrarse en el 35 Batallón o que preguntaran en dichas instalaciones.
- Lo anterior se encuentra corroborado por las declaraciones que obran en el marco de la averiguación previa del caso, además de las declaraciones que han sido desahogadas por el Estado de manera escrita ante esa Corte.

47. De esta manera, el Estado mexicano sostiene que las declaraciones de los funcionarios públicos han sido consistentes, por lo que de éstas no puede derivarse algún indicio que apunte a que la desaparición alegada sea imputable a agentes del Estado o con la aquiescencia del mismo.

48. A la luz de los anteriores elementos, y aquéllos descritos con amplitud en la contestación al ESAP, el Estado sostiene que la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene

Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera no le es atribuible. Ante lo cual, no se comprueban los elementos para concluir la existencia de una desaparición forzada en el presente caso.

D. Amenazas y hostigamiento y otras violaciones conexas.

49. Respecto a la posición del Estado mexicano de frente a la responsabilidad alegada por la Representación y la CIDH, en torno a supuestos actos de amenazas y hostigamiento en contra de los familiares de las personas desaparecidas, así como otras violaciones conexas, el Estado considera que los actos que se encuentran descritos por la CIDH en los párrafos 183, 184, 185, 189, 190 y 195 de su informe de fondo, no pueden ser catalogados como hechos de amenaza y hostigamiento, en tanto constituyen actuaciones estatales justificadas. Éstas incluyen citatorios, la necesidad de que se identifiquen las personas que entran a una instalación gubernamental por cuestiones de seguridad, solicitudes de información, presencia de agentes estatales o comentarios que se considera, no representan una amenaza para los familiares de las personas desaparecidas, sino medidas institucionales y apegadas a la legislación mexicana.

50. No obstante lo anterior, el Estado identifica la existencia de situaciones legítimas de riesgo reportadas por los familiares, razón misma que justificó el otorgamiento de medidas provisionales por esa Corte IDH. Al respecto, el Estado sostiene lo siguiente:

- El Estado continúa llevando a cabo las investigaciones conducentes.
- De dichos sucesos no es posible concluir que los actos sean atribuibles a agentes estatales.
- El Estado ha implementado diversas medidas a efectos de garantizar la seguridad de las personas beneficiarias. Particularmente, el Estado ha informado a esa Corte sobre el plan y medidas de protección que se encuentran actualmente vigentes para los beneficiarios.

51. Al margen de lo anterior, en relación con el lamentable asesinato del señor Fabián Alvarado Herrera, ocurrido el 6 de febrero de este año, las investigaciones a cargo de la Fiscalía del estado de Chihuahua han sido impulsadas de manera diligente. Particularmente, se ha librado

y ejecutado una orden de aprehensión en contra de tres presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada; asimismo, se llevarán a cabo las acciones necesarias para que se sancione efectivamente a los responsables de estos hechos.

52. Ahora bien, de frente a otras violaciones conexas alegadas en este caso, el Estado mexicano sostiene que en tanto son una consecuencia de las violaciones alegadas previamente, y toda vez que se ha argumentado la imposibilidad de atribuir dichos actos a agentes estatales, las violaciones conexas siguen el mismo cauce que las anteriores. Por lo que resulta inviable establecer la responsabilidad del Estado por las violaciones alegadas de honra y dignidad, integridad personal, derecho a la familia, libre circulación y derechos de la niñez.

53. Asimismo, respecto a la alegada violación a la Convención Belém Do Pará, el Estado resalta que la propia CIDH concluyó en su informe de fondo que no existen elementos para concluir dicha violación. Sin embargo, la Representación incluyó una frase en el ESAP en donde indica que el Estado mexicano violó el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, pero sin hacer mención de alguna prueba, hecho o argumento que haga valer su dicho.

54. En este sentido, el Estado considera que a la luz de los artículos 34 y 37 del Reglamento de esta Corte, la etapa del procedimiento oportuna para presentar argumentos sobre las presuntas violaciones a derechos humanos, son el primer escrito presentado por la CIDH y el ESAP de la Representación. Por lo que se considera que esa Corte IDH no debe pronunciarse en torno a las supuestas violaciones a la Convención Belém Do Pará.

E. Investigaciones a cargo del Estado.

55. Esa Corte IDH ha señalado que las investigaciones en casos en los que se presume la comisión de desaparición forzada deben ser conducidas con la debida diligencia. Ello implica que las investigaciones sean iniciadas sin dilación y que las actuaciones necesarias para procurar el esclarecimiento de los hechos sean llevadas a cabo en un plazo razonable.

56. Respecto del requisito de iniciar investigaciones sin dilación, se resalta que:

- Momentos posteriores a la desaparición, un amigo de éstas habría reportado lo sucedido a la Comandancia de Seguridad Pública y Vialidad del Ejido Benito Juárez. Derivado de ello se iniciaron acciones de búsqueda inmediatas el mismo día inmediato 30 de diciembre de 2009, mismas que incluso fueron interrumpidas a petición de los familiares, aduciendo que ya habían sido localizados, tal y como lo aseveró Manuel Reyes Lira, quien es el padre de Patricia Reyes Rueda, abuelo de Rocío Irene Alvarado Reyes, de conformidad con el testimonio ministerial de Mario Castro García.
- Posteriormente, el 31 de diciembre de 2009, se presentó una denuncia formal ante la Unidad Especial contra la comisión de los delitos de Buenaventura. A partir de ese momento se iniciaron las investigaciones respectivas.
- Por lo tanto, se sostiene que las investigaciones fueron iniciadas de manera inmediata a su denuncia, al igual que se impulsaron acciones de búsqueda.

57. Ahora bien, en cuanto a la obligación de que las actuaciones necesarias para procurar el esclarecimiento de los hechos sean llevadas a cabo en un plazo razonable, el Estado mexicano reconoce que actualmente no se han arribado a conclusiones en torno al paradero de las personas desaparecidas y las probables responsabilidades penales frente a los hechos.

58. Al respecto, el Estado resalta que la obligación de llevar a cabo una investigación diligente es de medios y no de resultados; sin embargo, se reconoce que el Estado tiene la carga de demostrar las razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado un periodo determinado. A efectos de valorar la razonabilidad del plazo que han tardado las investigaciones del caso, debe contemplarse, entre otros aspectos, la **complejidad del asunto**.

59. Respecto a la complejidad del asunto, la CIDH resaltó en su informe de fondo que “*el caso puede entenderse, en principio, complejo*”; sin embargo, consideró que el retardo no sería consecuencia de dicha complejidad, dando el peso determinante al tiempo que tardó la investigación en radicarse ante una sólo autoridad.

60. Al respecto, el Estado se permite sostener lo siguiente:

- Tal como lo identificó la CIDH, el Estado reconoce que fueron iniciadas múltiples investigaciones de manera simultánea por los hechos de este caso, y al menos 3 entidades conocieron de las investigaciones penales; mismas que fueron finalmente integradas en 2013, a una sola investigación a cargo de la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas (actualmente Fiscalía Especializada para la investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR), una vez que ésta fue creada.
- No obstante lo anterior, y sin el afán de minimizar la obligación a cargo del Estado de esclarecer los hechos de este caso, las diversas investigaciones del caso fueron iniciadas a raíz de las distintas denuncias que realizaron los familiares de las personas desaparecidas durante 2009, 2010 e incluso 2013, ante diversas autoridades.

61. Sin lugar a dudas, el Estado entiende que los familiares no tenían ni tienen la obligación de conocer las autoridades competentes para un hecho tan complejo, además de que se resalta su deseo legítimo de dar con el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, el Estado resalta que la complejidad de los hechos de este caso en sí mismo dificultaron la posibilidad de sustentar de manera expedita las declinaciones de incompetencia o remisiones de expedientes por acumulación. El Estado llama la atención de esa Honorable Corte, al hecho de que cada autoridad tuvo que llevar a cabo acciones investigativas a efectos de dilucidar las probables responsabilidades y con ello, si éstas eran competentes o no para su investigación. Al margen de ello, con la creación de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada, ha sido posible integrar todo lo anteriormente actuado e impulsar las investigaciones de manera diligente.

62. El Estado mexicano considera que el presente caso ha sido sumamente complejo, no solamente por los hechos que se investigan, ya que la desaparición de una persona plantea en sí misma retos y obstáculos importantes. De manera concreta, el Estado mexicano resalta ciertos elementos que tornan el presente caso sumamente complejo:

- La sola referencia de los testigos presenciales que quienes se llevaron a sus familiares usaban vestimenta tipo militar, sin aportar mayor dato que permitiera realizar la debida

identificación de los perpetradores.

- El contexto que ha presentado el Estado, en el que se identifica una serie de actividades ilícitas llevadas a cabo por grupos delincuenciales a efecto de evadirse de la acción de la justicia. Particularmente, el uso de vestimenta tipo militar por parte de miembros de la delincuencia organizada.
- La compleja red de vínculos respecto de los hechos de este caso. Lo cual implica la diversidad de actores posiblemente involucrados en los hechos.
- Factores conexos que han implicado la necesidad de agotar sub líneas de investigación respecto del caso, como es la supuesta llamada que Nitza Paola Alvarado habría realizado tiempo después de su desaparición.
- La dificultad de confirmar ciertas hipótesis de la investigación, a la luz de la información disponible. Incluso de frente a las acciones investigativas que se han llevado a cabo.
- Las dificultades de acceso a ciertas localidades para la búsqueda de las personas desaparecidas, dado el esquema geográfico de la región y la falta de información eficaz para lograr ubicar el paradero.

63. A la luz de lo anterior, el Estado mexicano solicita respetuosamente a esa Corte IDH, que en la evaluación que realice de las investigaciones, se consideren los elementos anteriores. Asimismo, a efectos de que se lleve a cabo esta evaluación, el Estado resaltará de manera general el estado actual que guarda la investigación a cargo de la PGR:

64. Actualmente se encuentran bajo análisis **3 líneas de investigación**: (i) la línea referente a militares; (ii) la línea referente a Policía Federal; y (iii) la línea relacionada con la delincuencia organizada.

65. A la luz de las diferencias que implica la responsabilidad estatal de la responsabilidad penal, hasta ahora no es posible dar por cerrada alguna de las líneas de investigación anteriores.

66. Respecto de la línea de investigación sobre **militares**, el Estado resalta que ésta es sin lugar a dudas la que más se ha explorado a nivel interno, tal como se desprende de las

declaraciones escritas del señor Salomón Baltazar Samayoa y Víctor Cruz Martínez; así como de la declaración desahogada durante la audiencia pública por la agente del Ministerio Público, Mariana Colín Ayala. Ello atiende necesariamente a que ésta se constituyó como la línea de investigación más lógica de frente a las declaraciones de los familiares de las personas desaparecidas y, por supuesto, a la identificación por parte de éstas de vestimentas tipo militar que portaban los responsables de los hechos. No hay duda de que el Estado mexicano ha enfocado sus esfuerzos en el grueso de la investigación a analizar la posible responsabilidad penal de elementos castrenses.

67. De hecho, la PGR consignó a un probable responsable perteneciente a las fuerzas armadas; no obstante, el Poder Judicial de la Federación determinó que no se demostró fehacientemente que la detención de las víctimas se haya realizado por elementos del Ejército Mexicano, que las declaraciones de los testigos presenciales son insuficientes para acreditar que fueron los elementos del Ejército Mexicano quienes realizaron la detención y posterior desaparición de las víctimas directas. En su decisión para negar la orden de aprehensión solicitada por la PGR, así como en la decisión derivada de la apelación posteriormente presentada por la misma autoridad ministerial, el Poder Judicial Federal mexicano evaluó el acervo probatorio en su conjunto, no siendo posible cumplir con el estándar necesario para la emisión de dicha orden judicial.

68. En relación con la **línea de investigación de la Policía Federal**, se ha analizado el posible vínculo que pudiera existir con el asesinato de tres elementos de esta corporación, ocurridos en octubre de 2009, no siendo posible, hasta este momento, obtener datos que corroboren dicho vínculo. Asimismo, del estudio de esta línea se ha identificado que las actuaciones de la Policía Federal durante el 2009 no tuvieron un impacto directo en el ámbito de la seguridad pública, además de que su participación se enfocó en Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Por último, en el estudio de esta línea de investigación se ha analizado que sujetos identificados como elementos de la Policía Federal, se presentaron ante el Agente del Ministerio Público de la Federación en Nuevo Casas Grandes, preguntando si las personas desaparecidas

habrían sido puestas a disposición. Al respecto, del acervo probatorio se ha identificado que la desaparición de las tres personas se hizo de conocimiento público, incluso mediante medios de comunicación masiva, así como derivado del contacto inmediato que tuvieron los familiares con funcionarios públicos, razón por la cual policías ministeriales comenzaron la búsqueda de las personas desaparecidas y comenzaron a tener contacto con diferentes funcionarios públicos.

69. Por último, en relación con la **línea de investigación relacionada con la delincuencia organizada**, se destacan los siguientes elementos relevantes: (i) la alta presencia de la delincuencia organizada en Chihuahua; (ii) el uso de vestimenta tipo militar por este tipo de agrupaciones; (iii) las referencias de familiares de las personas desaparecidas en torno a supuestas interacciones con personas que formaban parte de la delincuencia organizada.

70. Sobre este último punto, el Estado destaca (i) el asesinato del padre y tío de Rocío Irene, aproximadamente un año antes de los hechos de este caso, quien habría sido “levantado” presuntamente por miembros de la delincuencia organizada; (ii) la declaración de Patricia Reyes Rueda, madre de Rocío Irene, quien señala que su hija tenía intención de esclarecer los hechos sobre el asesinato de su padre y tenía contacto con un presunto integrante de un grupo delincuencia, a lo cual su madre le habría pedido no ponerse en una situación de riesgo; (iii) existe el antecedente sobre la aportación de información por parte de Rocío Irene y Nitza Paola a elementos de la Policía Federal, relacionada con actividades que desarrollaba un grupo delincuencia, lo cual habría ocurrido aproximadamente un mes antes de ocurrida la desaparición, cuestión que se considera pudo haber colocado a las dos personas en una situación de riesgo real de frente a los intereses posiblemente trastocados por el grupo delincuencia; y (iv) existen otras menciones formuladas por familiares en torno a supuestas actividades ilícitas, las cuales ya fueron descritas por el Estado en su contestación.

71. De los anteriores elementos, el Estado observa que las personas desaparecidas se encontraban en una situación de riesgo, expuestas a la actuación de al menos dos grupos de la delincuencia organizada. Inclusive, puede observarse a lo largo de varios años, cómo diversos integrantes de esta familia han sido víctimas de grupos de la delincuencia organizada, de manera

repetida, incluyendo el reciente y lamentable asesinato de Fabián Alvarado Herrera.

72. Ahora bien, el Estado mexicano resalta que, respecto de la búsqueda de las personas desaparecidas, las autoridades mexicanas han llevado a cabo acciones aparejadas a las líneas de investigación que se estudian. Asimismo, se resalta que en el marco de la audiencia pública llevada a cabo en 2014, en relación con el procedimiento de medidas provisionales, se estableció un Plan de Búsqueda que incluye la búsqueda para lograr la localización con vida o sin vida de las personas desaparecidas; mismo que ha guiado las actuaciones de la PGR y que actualmente sigue vigente y se actualiza.

73. A la luz de lo anteriormente descrito, el Estado considera que ha impulsado las investigaciones de este caso de manera genuina, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales y establecer el paradero de las personas desaparecidas.

F. Reparaciones solicitadas.

74. De manera alternativa, el Estado considera que, de comprobarse la responsabilidad internacional de México, esa Corte IDH debe considerar lo siguiente (en adición a los argumentos y posicionamientos del Estado en su contestación al ESAP):

- Tal como lo señaló la CIDH en su informe de fondo 3/16, esa Corte IDH deberá tomar en cuenta las medidas que ya han sido otorgadas por el Estado, en el marco del cumplimiento de las medidas provisionales.
- Adicionalmente, el Estado solicita que se tomen en cuenta las medidas estructurales que el Estado ha implementado en materia de desaparición de personas e investigación diligente, particularmente se destaca: 1) la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 2) la creación de los sistemas e instituciones que se crean derivado de dicha Ley, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, el Banco Nacional de Datos Forenses, la Comisión

Nacional de Búsqueda, y el Consejo Nacional Ciudadano, entre otros.

- Asimismo, se solicita que la posible indemnización que establezca esa Corte IDH, permita ser sufragada mediante los canales internos con los que cuenta el Estado, particularmente, mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de los Compromisos Internacionales en materia de derechos humanos.
- Por último, se considera que algunas medidas solicitadas por la Representación, no son jurídicamente viables, ni razonables, en virtud de que en algunos casos, las medidas requeridas no guardan un nexo causal entre los hechos del caso, y la reparación solicitada. Por ejemplo, la medida de reparación concerniente al daño material, la Representación no ha expuesto argumento alguno sobre la relación entre la solicitud de los pagos y los hechos del presente caso. Únicamente se ha limitado a presentar una gran cantidad de comprobantes sin explicar su nexo causal con el caso. Asimismo, sobre la solicitud de reintegrar los gatos de la familia Spector, dicha familia no se encuentra identificada como víctima en el informe de fondo de la CIDH. En relación con los gastos y costas solicitadas, no se formula argumento o explicación alguna sobre el desembolso, hechos y su relación con el asunto, limitándose a presentar una tabla con las cantidades erogadas, entre las cuales destacan rubros como “apoyo en efectivo” y “otros”.

75. En ese sentido, el Estado solicita a esta Honorable Corte que desestime dichas solicitudes de reparación formuladas por la Representación.

II. OBSERVACIONES DEL ESTADO EN TORNO A LAS DECLARACIONES RENDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA, A *AFFIDÁVITS* ENVIADOS POR LA REPRESENTACIÓN Y RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS JUECES DE LA CORTE IDH.

A. Observaciones a las declaraciones de testigos desahogadas durante la audiencia.

a) Observaciones a declaraciones de la testigo María de Jesús Alvarado Espinoza.

76. Sobre el testimonio vertido por María de Jesús Alvarado Espinoza, el Estado mexicano

destaca que la testigo no presencié directamente los hechos del 29 de diciembre de 2009. Incluso, como se abordará en la presente sección, se resaltarán algunas contradicciones entre la declaración de la testigo vertida durante la audiencia pública y el soporte documental presentado por el Estado mexicano.

77. Asimismo, el Estado mexicano se permite formular algunas observaciones en torno a las preguntas que los jueces y jueza de esa Corte IDH formularon a la testigo en cuestión.

i. Aseguramiento de la camioneta.

78. En primer término, la testigo mencionó durante su declaración que los funcionarios ministeriales de la Agencia de Nuevo Casas Grandes le habrían referido que la camioneta azul, propiedad de Nitza Paola Alvarado fue asegurada y puesta a disposición por elementos militares.

79. En este mismo sentido, se destaca el testimonio de Obdulia Espinoza Beltrán – quien sí es testigo presencial de los hechos- refirió que esa misma noche, escuchó ruidos al exterior de su casa por lo que se asomó por la ventana y observó a policías ministeriales, quienes tomaron fotografías del vehículo para después enganchar la camioneta y llevársela.

80. En efecto, la señora Obdulia Espinoza Beltrán fue la única familiar de las personas desaparecidas que presencié directamente los hechos en los cuales la camioneta de Nitza Paola Alvarado Espinoza fue asegurada por las autoridades. En su relato, especifica que únicamente observó a policías ministeriales recoger el vehículo sin la presencia de militares.

81. Lo anterior, es congruente con lo declarado por los funcionarios Mario Castro García y Oscar Arias Ocampo, ambos elementos de la policía ministerial, quienes declararon que fueron elementos de la policía ministerial quienes recogieron el vehículo.

82. En esta tesitura, se pone de relieve el testimonio de Óscar Arias Ocampo, vertida ante esta Corte IDH en carácter *affidavit*. En dicho testimonio se detalla las razones y forma en las que se llevó a cabo el aseguramiento de la camioneta en cuestión. Testimonio que no resulta inverosímil toda vez que dicho declarante participo en el aseguramiento, traslado y puesta a

disposición de la unidad automotriz.

83. Por lo tanto, el Estado mexicano sostiene que la camioneta propiedad de Nitza Paola Alvarado Espinoza fue asegurada por elementos ministeriales y posteriormente fue llevada a la Agencia Ministerial de Nuevo Casas Grandes.

ii. Supuesta afirmación de que las personas desaparecidas se encontraban en el 35° Batallón.

84. La testigo refirió supuestos pronunciamientos de funcionarios estatales mediante los cuales indicaron que sus familiares desaparecidos se encontraban bajo custodia del 35° Batallón de Infantería.

85. En efecto, la señora María de Jesús Alvarado Espinoza menciona que el Agente Ministerial Aarón Enríquez Duarte les habría afirmado que “el Ejército se llevó a sus familiares, y que incluso, giraría un oficio para solicitar su puesta a disposición”.

86. Al respecto, contrario a lo señalado por la testigo, en declaración del propio Aarón Enrique Duarte éste señaló que *“el único comentario que les hice, fue en el sentido de que si los Militares los habían detenido que lo más conveniente es que fueran a solicitar información al Trigésimo Quinto Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que esto lo hice en virtud de que es la Unidad de la Secretaria de la Defensa Nacional más cercana. - nunca hice el comentario de en el sentido de que tenía conocimiento que sus familiares estuvieran en dicho batallón ni mucho menos que se haya efectuado una redada por parte del personal militar y que a sus familiares los habían detenido y se encontraban en el Batallón²”*.

87. Es decir, el comentario que hace el testigo Aarón Enríquez Duarte obedece a la propia referencia de los familiares, quienes se presentaron ante el mismo solicitando información de 3

² **Anexo 46 de la Respuesta del Estado** - Declaración de Aaron Enrique Duarte el 24 de mayo de 2010 ante el Ministerio Público Militar y **Anexo 47 de la Respuesta del Estado**- Declaración de Aaron Enrique Duarte del 25 de octubre del 2010 ante la FEVIMTRA.

personas detenidas por militares, de ahí que el testigo refiriera lo anterior.

88. No obstante, durante el interrogatorio formulado por el Estado mexicano, se develó que la testigo no conocía el contenido de las declaraciones vertidas por dicho funcionario durante las investigaciones.

89. En esta tesitura, el Estado mexicano pone de relieve que en dichas declaraciones, e incluso las presentadas ante esa Corte IDH en carácter de *affidavit*, se establece de manera consistente que en ningún momento el señor Enríquez Duarte aseguró que las personas desaparecidas se encontraban bajo control de elementos castrenses. Más bien, sugirió a los familiares -derivado de sus propias aseveraciones- que preguntaran en dicho destacamento, considerando que los elementos que habrían detenido a las personas desaparecidas vestían uniformes tipo militar.

90. Asimismo, la testigo señaló que Horacio Flores les refirió que el Ejército tenía a sus familiares. Sobre el particular, el Estado mexicano pone de relieve que el señor Horacio Flores Martínez declaró durante las investigaciones del presente caso que sugirió a los familiares dirigirse con los militares. No así que le constara que sus familiares se encontraran con miembros del Ejército.

91. El Estado mexicano desea resaltar que las declaraciones de los funcionarios mexicanos que tuvieron contacto con los familiares de las personas desaparecidas son consistentes entre sí, y se encuentran corroboradas por el resto del material probatorio que presenta el Estado mexicano.

92. Por lo tanto, el Estado mexicano reafirma los argumentos y pruebas presentadas en su contestación, con el fin de sostener que los funcionarios públicos que atendieron a los familiares de las personas desaparecidas en ningún momento aseguraron que elementos castrenses tenían a sus familiares.

iii. General Lohmann.

93. La testigo mencionó que el General de Brigada Jens Pedro Lohmann Iturburu les habría apoyado durante las investigaciones pero después habría sido relevado de su cargo.

94. Al respecto, el Estado mexicano destaca que en efecto, la Secretaría de la Defensa Nacional inició investigaciones internas sobre los hechos del presente caso, para lo cual se designó al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Jens Pedro Lohmann Iturburu, con el fin de investigar la probable participación del Ejército en la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes.

95. En esta tesitura, durante las investigaciones realizadas por el General de Brigada Lohmann Iturburu se constató que de los dichos de los familiares y de los agentes de la policía seccional de Benito Juárez, se podía determinar que los vehículos utilizados no eran militares, la denuncia fue presentada extemporáneamente y existía una diferencia en el color de la hummer referida, primero amarilla después blanca. También se constató que el día de los hechos no había presencia militar en el Ejido de Benito Juárez.

96. Cabe destacar que, de acuerdo con la declaración del General de Brigada Jens Lohman Iturburu se apersonó en compañía de la representante Luz Estela Castro e incluso de familiares de las personas desaparecidas, tanto en el lugar de los hechos, es decir la calle donde “levantaron” a Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, así como a las oficinas donde se concentró la camioneta propiedad de María de Jesús Alvarado Espinoza. En esa ocasión los familiares de las personas desaparecidas, insistieron que se trató de un comando armado, no así de personal del Ejército y se aclaró que la camioneta fue concentrada en Nuevo Casas Grandes por policías ministeriales no así por elementos del Ejército, lo cual se hizo evidente, puntualizando que no existe elemento que pueda poner en duda la actuación y aseveración realizada por dicho General.

97. Con lo anterior, dicha investigación concluyó que no existían elementos de juicio para asegurar o suponer la presencia de personal militar durante la desaparición de Nitza Paola

Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes³.

98. Se pone de relieve que el General de Brigada Jens Pedro Lohmann Iturburu se retiró de Chihuahua en virtud de que había cumplido con el mandato que se le ordenó. Para ello, el Estado mexicano destaca el contenido del informe que dicho General remitió al Comandante de la Quinta Zona Militar, el cual obra en el anexo 96 de la respuesta del Estado mexicano.

99. Asimismo, el Estado destaca que de la declaración de la testigo puede desprenderse que la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo cercana a los familiares de las personas desaparecidas, dando seguimiento al asunto y apoyando en gran medida a éstos, tal como lo reconoce la testigo respecto de las actuaciones del General Lohmann, lo cual se considera debe ser tomado en cuenta por esa Corte como un elemento adicional que desvirtúa la atribución de la desaparición a miembros castrenses.

iv. Contexto de presencia del Ejército en Buenaventura.

100. Durante el cuestionamiento formulado por su Excelencia Patricio Pazmiño, se le preguntó a la testigo la razón por la cual había presencia militar en el Ejido Benito Juárez. En este sentido, el Estado mexicano resalta lo siguiente:

- El 35° Batallón no formaba parte directamente del Operativo Conjunto Chihuahua y no fue instalado derivado del mismo. Dicha Unidad ya se encontraba establecida con antelación y su sede se encuentra de manera permanente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
- Asimismo, el Estado mexicano aclara que el Operativo Conjunto Chihuahua no inició por el asesinato de los tres policías federales ocurridos en octubre de 2009.
- El 28 de marzo de 2008 dio inicio el Operativo Conjunto Chihuahua, con el objetivo de combatir la inseguridad pública, así como el elevado número de homicidios vinculados

³ **Anexo 96** - Mensaje F.C.A. 030/GA0/2653-2656, de fecha 15 de enero de 2010, dirigido al Comandante de la Quinta Zona Militar, signado por el General de Brigada D.E.M. J. P. Lohman Iturburu.

con la delincuencia organizada; no obstante, este operativo se enfocó especialmente en Ciudad Juárez, y no a la localidad en la que se llevaron a cabo los hechos del presente caso.

- El Operativo se llevó a cabo como una estrategia gubernamental que tuvo como finalidad primordial regresar a la población de aquella entidad federativa la paz y seguridad, que paulatinamente les fue arrebatada por las organizaciones criminales que operan en estos territorios.
- Dicho Operativo estuvo integrado por personal de la Secretaría de Gobernación, la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, debido al alarmante incremento de los delitos de alto impacto por las organizaciones criminales operando en esa zona.

101. El Operativo constó de tres etapas principales:

- **27 de marzo de 2008.** Durante esta primera etapa, se informó de la puesta en marcha del Operativo, con la participación de los tres órdenes de gobierno y con el objetivo de "fracturar y dismantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales".
- **15 de marzo de 2009.** En la segunda etapa se reforzó el Operativo Conjunto Chihuahua, estrategia que fue revisada de manera conjunta entre la Federación y autoridades estatales y municipales, cambiando su denominación a "Operación Coordinada Chihuahua".
- **"Todos somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad".** Durante la última etapa, la estrategia tenía la finalidad de combatir la violencia de manera integral. Es decir, el enfoque del Operativo se vuelve transversal al atender cuestiones económicas, sociales y culturales. En ese sentido, el 17 de febrero de 2010 se dio inicio a la Estrategia "Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad", en respuesta a la violencia que enfrentaba

Ciudad Juárez. El programa de acción integral respondía a la compleja situación del municipio e incluía 160 acciones concretas que buscaban disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

102. En suma, el objetivo principal del Operativo Conjunto Chihuahua fue asegurar la paz y seguridad en la región, seguido por acciones para reconstruir la vida en comunidad y la cohesión social.

103. Asimismo, es importante resaltar que las operaciones llevadas a cabo durante el mismo, conllevaron la implantación de acciones de seguridad en contextos sumamente complejos y el despliegue legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado, por lo que se implementó un servicio de atención y seguimiento a quejas, que permitían atender cualquier incidente que surgiera en el marco del operativo de referencia.

104. Finalmente, el Estado mexicano se permite destacar las siguientes cuestiones, respecto del Operativo Conjunto Chihuahua:

- El Operativo se llevó a cabo como una estrategia gubernamental que tuvo como finalidad primordial regresar a la población de Chihuahua, la paz y seguridad, que paulatinamente les fue arrebatada por las organizaciones criminales que operaban en esos territorios.
- El Estado rechaza que derivado del Operativo se hayan cometido violaciones de derechos humanos como parte de una política de Estado en Chihuahua.
- Los casos en los que se tuvo registro de que, como resultado de las actividades realizadas, se afectaron a la población en general, se dio intervención inmediata a las autoridades competentes.
- El proceso de cambios en las instituciones públicas, jurídicas y sociales en México, se han traducido en un alto grado de institucionalización y de consolidación de políticas públicas encaminadas a la protección de los derechos humanos.

- El Estado mexicano además actúa bajo el escrutinio permanente de los organismos públicos protectores de derechos humanos, así como de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la opinión pública y de los organismos internacionales.

v. Declaraciones vertidas por la testigo.

105. Durante su declaración, la testigo afirmó que el Estado mexicano no la había citado a declarar en el marco de las investigaciones del presente caso.

106. Al respecto, el Estado mexicano niega categóricamente esa aseveración y a continuación presenta una lista de diligencias en las que ha participado la testigo en cuestión, las cuales obran en la respuesta del Estado mexicano y anexos correspondientes:

- Anexo 17 - Acta de denuncia de María de Jesús Alvarado Espinoza del 31 de diciembre de 2009, en la carpeta de investigación 124/2009-5326 iniciada en la Agencia del Ministerio Público de Buenaventura, Chihuahua.
- Anexo 18 - Comparecencia de María de Jesús Alvarado Espinoza del 6 de enero de 2010, en la averiguación previa AP/PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A, iniciada en la Mesa Séptima de la Delegación de la PGR en el estado de Chihuahua.
- Anexo 19 - Declaración de María de Jesús Alvarado Espinoza del 12 de febrero de 2010 ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.
- Anexo 20 - Comparecencia de María de Jesús Alvarado Espinoza del 22 de febrero de 2010, dentro de la averiguación previa PGR/CHIH/JUA/VII/27/2010-VII-A, ante el Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la séptima Agencia Investigadora de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" de la Delegación de la PGR en el Estado de Chihuahua.
- Anexo 21 - Declaración de María de Jesús Alvarado Espinoza del 4 de agosto de 2011,

ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A” de la Delegación de la PGR en el Estado de Chihuahua.

107. Al respecto se considera que la testigo incurre en contradicción con respecto a sus actuaciones en el marco de las investigaciones.

vi. Situación de Élfego José Luján Ruíz.

108. La testigo, al contestar a una pregunta formulada por su Excelencia Patricio Pazmiño sobre la situación del Coronel Élfego José Luján Ruíz, refirió que el Estado mexicano no les permite recabar declaraciones a dicho militar, con el objeto de que proporcione información sobre el paradero de las personas desaparecidas.

109. Sobre este punto, el Estado mexicano destaca que la testigo pretende que esa Corte IDH funja como un tribunal penal en donde inste al Estado mexicano a castigar al Coronel Élfego José Luján por la desaparición de sus familiares. En esta tesitura, se pone de relieve respetuosamente, que esa Corte IDH no tiene competencia para pronunciarse sobre la responsabilidad penal.

110. Asimismo, el Estado mexicano enfatiza que en ningún momento se ha obstaculizado la investigación de dicho elemento militar como probable responsable de los hechos de este caso. Incluso fue recabada su correspondiente comparecencia ministerial en dos ocasiones, la primera el 1º de Junio de 2011 y la segunda el 13 de Junio de 2013 ante autoridad ministerial, ambas diligencias en torno a la desaparición de los integrantes de la Familia Alvarado.

111. En esta tesitura, se destaca que dentro de las investigaciones que se desarrollan en el presente caso, se ejerció acción penal en contra del Coronel Élfego José Luján Ruíz y el órgano jurisdiccional negó la orden de aprehensión por considerar que no había pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

112. Adicionalmente, el Estado mexicano refiere que de ninguna manera ha dejado impune o ha obstaculizado la investigación de delitos cometidos por militares. Por ello, se pone de relieve

que se han iniciado procesos en contra del Coronel Élfego por diversos delitos no relacionados a la base fáctica del presente caso.

113. De esta manera, de acuerdo con la información referida, se pone de relieve que el Estado mexicano de ninguna forma obstaculiza la investigación de alegados delitos presuntamente cometidos por militares.

114. Al margen de los apartados analizados, el Estado mexicano estima que el testimonio vertido por María Alvarado no aporta elementos adicionales y novedosos para el análisis del presente caso. Asimismo, se ha develado que la testigo no presencié los hechos de manera directa y que durante su declaración incurrió en contradicciones con otras pruebas vertidas.

115. Por lo tanto, el Estado mexicano solicita a esa Corte IDH que considere las observaciones vertidas en el presente apartado al momento de evaluar el valor probatorio de la declaración vertida por la testigo.

b) Observaciones a las declaraciones del testigo Jaime Alvarado Herrera.

i. Allanamiento de morada del testigo.

116. Durante su declaración, el testigo hizo referencia al allanamiento de su morada, ocurrido el 28 de agosto de 2011.

117. Sobre el particular, el Estado mexicano se permite reafirmar la línea argumentativa vertida en la contestación al ESAP, mediante la cual se demuestra que los supuestos actos de amenaza y hostigamiento no son atribuibles al Estado.

118. Particularmente, ni la representación ni la CIDH han brindado elementos para asegurar que dichos actos son atribuibles al Estado mexicano; particularmente, no existe elementos alguno que indique la responsabilidad de elementos castrenses. De manera paralela, el Estado ya ha brindado información en torno a las medidas que ha llevado a cabo para proteger a los beneficiarios de medidas provisionales.

119. De igual forma, el declarante refirió no contar con información alguna respecto de las acciones investigativas del Estado por el hecho denunciado. Al respecto el 20 de febrero de 2013, una vez agotadas las diligencias realizadas por le Procuraduría General de la República, se determinó el Acuerdo de consulta de incompetencia de la AP/PGR/CHIH/JUA/2758/2011-XI-A por delitos de amenazas y allanamiento de morada, en contra de Sandra Luz Quezada. En dicha investigación se agotaron entre otras, las siguientes diligencias:

- Denuncia y ratificación de la C. Sandra Luz Rueda Quezada en donde refiere “personas desconocidas las cuales se introdujeron en mi domicilio alrededor de 4:30”
- Declaración de Lorenza Patricia Garanda (representante de las víctimas) y su reconocimiento como coadyuvante en la investigación
- Declaración de Emilia De Lourdes González Tercero
- Diligencia de fe ministerial de la hoja que contenía las amenazas
- Diligencia de inspección ocular en el domicilio
- Dictamen en materia de Criminalística de campo, en la cual se realizó la búsqueda de indicios en el interior del inmueble, con su identificación y embalaje correspondiente
- Dictamen en materia de química respecto de polvo encontrado esparcido por la casa
- Representación gráfica del fraccionamiento
- Dictamen en dactiloscopia forense
- Se solicitó a policía federal si contaban con algún antecedente al respecto
- Se realizó una investigación de policía federal ministerial
- Búsqueda de Rosario para efectos de recabar su declaración al ser una de las vecinas que había observado dichos hechos, la cual no rindió resultados al ser un lugar deshabitado.

120. La declinatoria fue autorizada en virtud de que dichos actos no fueron efectuados en contra del algún bien perteneciente al patrimonio de la federación y únicamente en perjuicio de la esfera de un particular, al igual que no hubo elementos que pudieran dar cuenta de que fueran cometidos por servidores públicos federales en términos de lo contemplado en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Como efecto de lo anterior, la Fiscalía del

estado de Chihuahua ha desahogado diversas testimoniales y se encuentra realizando diligencias para su perfeccionamiento.

121. Por lo tanto, el Estado mexicano considera que no hay elementos suficientes para atribuir la responsabilidad estatal por el allanamiento del hogar de Jaime Alvarado Herrera.

ii. Asesinato de Fabián Alvarado Herrera.

122. En atención a la pregunta realizada por su Excelencia Patricio Pazmiño sobre el asesinato de Fabián Alvarado Herrera, el Estado mexicano se permite aportar información para efectos de externar el avance de las investigaciones sobre el mismo.

123. El 6 de febrero de 2018, sujetos armados privaron de la vida a Fabián Alvarado Herrera (hijo de Rosa Olivia Alvarado Herrera a su vez hermana de José Ángel Alvarado Herrera) y Marco Eduardo Ruíz Torres, en la Colonia Hacienda Universidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

124. El Estado mexicano –por medio de la Fiscalía General de Chihuahua- inició la Carpeta de Investigación 4510/2018, por el Delito de Homicidio Calificado en perjuicio *Fabián Alvarado Herrera y Marco Eduardo Ruiz Torres*.

125. El 08 de febrero del 2018, se libró y ejecutó la orden de aprehensión en contra de Israel Guerrero Gurbina, Carlos Alfonso Gutiérrez Olveda y Juan José Gómez Carlos, presuntos integrantes del grupo delictivo los Artistas Asesinos, sicarios del Cartel de Sinaloa. Del expediente se desprende que dichos sujetos aceptaron *haber participado en la muerte de dos personas en la colonia Hacienda de las Torres, ya que eran contras y se dedicaban a la venta de droga al menudeo en el sector*.

126. El 14 de febrero de 2018 se dictó Auto de Vinculación a Proceso, por los delitos de homicidio calificado previsto por los artículos 123, 124, 127, 136 fracción II, inciso B y D, todos del Código Penal vigente en el Estado de Chihuahua.

127. En este sentido, se llevarán a cabo distintas diligencias, como la declaración de posibles

testigos presenciales de los hechos, así como reconocimientos de los mismos sobre las personas que participaron en el evento delictivo.

128. Particularmente, el Estado desea destacar que, contrario a lo que sostiene la representación de las personas desaparecidas, al señalar que los actos de hostigamientos y amenaza provienen del Estado mexicano, en realidad, los elementos objetivos con los que se cuentan, indican que la fuente de riesgo ha provenido siempre del crimen organizado. Esto es corroborado con el reciente asesinato de Fabián Herrera, cuyos hechos fueron perpetrados por miembros del crimen organizado, por lo cual actualmente se encuentran detenidos y serán sancionados debidamente.

129. Lo anterior, también se ilustra con el asesinato del padre y del tío de Rocío Irene, aproximadamente un año antes de los hechos de este caso, el cual al parecer fue perpetrado por miembros de la delincuencia organizada.

130. Para el Estado mexicano, este contexto particular en el que siempre se ha ubicado la familia Alvarado es, sin lugar a dudas, un fuerte indicio para afirmar que la desaparición de las tres personas tampoco es atribuible a agentes estatales.

131. Al margen de los rubros analizados en el presente apartado, el Estado mexicano pone de relieve que el testigo en cuestión no presencié directamente los hechos. Asimismo, señaló que tampoco está al tanto de las investigaciones que se realizan.

132. Por ejemplo, cuando el Estado cuestionó si estaba al tanto de las declaraciones de Aarón Enríquez Duarte, el testigo refirió que únicamente sabía lo que le decían otros miembros de su familia que daban seguimiento a las investigaciones.

133. En este tenor, se destaca que el testimonio vertido por Jaime Alvarado Herrera carece de valor probatorio en virtud de que no presencié directamente los hechos ni ha participado directamente en las investigaciones.

134. Por lo tanto, el Estado mexicano solicita a esa Corte IDH que considere las

observaciones vertidas al momento de valorar el testimonio en cuestión.

c) Observaciones al testimonio vertido por Mariana Colín Ayala.

135. Respecto a la testigo Mariana Colín, el Estado desea resaltar, en primer lugar, que las tres líneas de investigación continúan abiertas y actualmente toda la investigación se encuentra concentrado ante una sola autoridad civil especializada en materia de desapariciones forzadas.

136. Como expuso la testigo, la línea de investigación en torno a la presunta participación del Ejército ha sido la más desarrollada llevando a las autoridades mexicanas a consignar a elementos de las fuerzas armadas; no obstante, no existieron elementos para comprobar su responsabilidad por los hechos, particularmente por la falta de elementos de prueba que conectara los hechos del presente caso al contexto analizado.

137. Dentro de la investigación se ha hecho un estudio pormenorizado del contexto, tanto de la actuación de las autoridades estatales, como de la delincuencia organizada, además de que se incorporaron las recomendaciones del Equipo Internacional de Peritos, mismas que no obstante fueron dirigidas a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, se han venido desahogando en lo conducente por la Procuraduría General de la República y consecuentemente tomadas en consideración en las investigaciones del caso. Más aún, la investigación consta de 77 tomos entre los cuales obran un gran número de diligencias para identificar a los responsables y encontrar a los hoy desaparecidos con o sin vida.

138. Asimismo, se han hechos diversos cruces genéticos con varias bases de datos, al igual que visitas de campo a diferentes lugares donde se podría identificar a Nitza Paola, Roció Irene y José Ángel.

139. Ahora bien, respecto a la pregunta planteada por el Juez Pazmiño en torno a si el operativo fue a causa del asesinato de tres agentes policiales del orden federal, el Estado reitera que el Operativo Conjunto Chihuahua comenzó desde el mes de marzo de 2008 debido a la fuerte presencia de la delincuencia organizada en la zona y como parte de un estrategia de

seguridad pública a nivel nacional. Posteriormente, en febrero de 2009 y tras una revisión conjunta de estado y federación sobre la estrategia, dicho operativo inició una segunda fase en la cual se reforzó la presencia policial y se dotó de apoyos al estado de Chihuahua para una mejor impartición de justicia. Finalmente, en 2010 se llevó a cabo el programa social “Todos Somos Juárez” para restablecer el tejido social e incentivar el desarrollo social y económico.

140. El homicidio de los agentes policiales sucedió en octubre de 2009, aproximadamente dos meses antes de la desaparición de Nitza Paola, Roció Irene y José Ángel. Es decir 8 meses después de iniciada la segunda etapa y casi año y medio después de iniciada la primera, por lo cual no hay una relación de causalidad entre dicho homicidio y el Operativo Conjunto Chihuahua.

141. Ahora bien, en atención a la pregunta que su Excelencia Zaffaroni formuló a la testigo sobre el amparo en libertad para personas desaparecidas o personas privadas de su libertad, el Estado mexicano desea destacar que al momento de los hechos, la normatividad en materia de amparo solicitaba la ratificación de la demanda de amparo. No obstante, con la nueva Ley de Amparo emitida el 2 de abril de 2013, se estableció un nuevo mecanismo para casos de desaparición.

142. En efecto, de conformidad con el artículo 15 de la ley en comento, *“Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida [...] desaparición forzada de personas [...] y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado [...] Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá*

copia certificada de lo actuado en estos casos”.

143. En otras palabras, bajo la legislación de amparo actual, si se presenta una demanda de amparo indirecto contra actos de autoridad por la desaparición de personas, en un primer momento se harán las diligencias necesarias para lograr la comparecencia de dichas personas. En caso de no lograrlo, se dará vista al Ministerio Público Federal para que investigue los hechos.

144. Al respecto, el Estado mexicano se remite a sus consideraciones expresadas en la contestación, en la cual se solicita a esa Corte IDH que, precisamente derivado de la reforma a la Ley de Amparo, se considere que el Estado ya ha realizado las adecuaciones necesarias para que ésta contemple recursos efectivos, de frente a la alegada desaparición de personas.

145. Finalmente, el Estado resalta que sobre la supuesta llamada realizada por Nitza Paola ésta fue determinada como una llamada de extorsión por las siguientes razones:

- La persona que realizó la llamada se identificó como Nitza Paola tras ser preguntada por la señora Juana Bustamante. Es decir, la señora Bustamante preguntó si quien llamaba era Nitza y dicha persona contestó en sentido afirmativo.
- Se realizó un rastreo de la llamada y se localizó que esta se realizó en las cercanías del Centro Penitenciario Femenil “Santa Marta Acatitla” en el Distrito Federal.
- De acuerdo con la sábana de llamadas que se obtuvo del teléfono donde se originó la llamada, se advierte que previo y posterior al teléfono de la Sra. Juana Bustamante, existe una seriación de marcaciones que cambian los últimos dos dígitos de los números receptores.

146. El número de teléfono fue identificado por una organización civil como un número que se usaba habitualmente para realizar extorsiones a personas simulando haber secuestrado a sus familiares.

147. Existen diversos precedentes a lo largo del país sobre este tipo de llamadas con el fin de extorsionar, aún si no lograban su objetivo.

148. Asimismo, se resalta que las anteriores conclusiones derivaron de las investigaciones realizadas por la PGR; información que ya fue compartida por el Estado en sus múltiples anexos a su contestación al ESAP.

149. Por último, respecto al involucramiento de una perspectiva de género en la investigación de los hechos, cabe resaltar que la investigación de delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres la Procuraduría General de República, son investigados por la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), misma que despliega sus acciones ministeriales bajo protocolos de actuación, en tres vertientes, ministerial, policial y pericial. En dichos manuales se prevé el análisis objetivo de los casos a través de una perspectiva de género que contemple el estudio del contexto en el que se enmarcan las acciones delictivas y de cómo impactan dentro de las líneas de investigación. Dicha normativa dispone que, las investigaciones ministeriales que incorporan la perspectiva de género, deben tener en cuenta para la elaboración de la teoría del caso, que la violencia dirigida contra las mujeres, es ejercida de manera mayoritaria por hombres formados en una sociedad que permite la discriminación de las mujeres por el hecho de serlo, entendiéndose que esta violencia es una consecuencia de violaciones estructurales a los derechos de las niñas y las mujeres. Paralelamente, no debe perderse de vista el análisis interseccional, que considera que las víctimas proceden de variados contextos, entornos y orígenes, lo cual implica reconocer los factores que, además de las razones de género, afectan la vigencia de los derechos humanos (tanto de hombres como de mujeres), como la situación económica, la salud, las creencias, la pertenencia a grupos minoritarios, personas en reclusión, orientación sexual, la edad, entre otros componentes.

150. Como ha sido expuesto por el Estado, la investigación de los hechos del caso se encontró a cargo de la FEVIMTRA del 8 de marzo 2010 al 30 de septiembre de 2011, tiempo en el que se valoraron entre otros elementos, los rasgos de violencia de género con que los presuntos

agresores hubiesen motivaron la ejecución del ilícito, la consideración de aquellos motivos que podrían estar asociados a la manifestación de la violencia y que se encuentran en el entorno social que influyen en el comportamiento del agresor y de las víctimas, si existieron situaciones de poder que por cuestiones de género dieran cuenta de un desequilibrio entre las partes y su hubo situaciones de desventaja provocadas por condiciones de su sexo o género. Una vez agotados los análisis jurídicos correspondientes y una vez realizadas múltiples diligencias, la investigación de los hechos, al no desprender elementos que dieran cuenta de un delito cometido en contra de las víctimas por razón de su sexo o género, fue declinada a la Delegación de la PGR en el estado de Chihuahua.

151. En virtud de lo expuesto, el Estado solicita a esta honorable Corte IDH que otorgue debida consideración a la declaración presentada por la Ministerio Público Mariana Colín.

B. Observaciones a testimonios escritos presentados por la Representación.

a) Observaciones al testimonio vertido por Sandra Luz Rueda Quezada.

152. En relación con el testimonio de Sandra Luz Rueda Quezada, el Estado mexicano observa que de los hechos que describe la señora Rueda Quezada, no se desprende que tenga certeza de los mismos, ya que no fue testigo presencial de los hechos del 29 de diciembre de 2009. La testigo únicamente recibió una llamada, y describe hechos que no le constan, sin que ello aporte algún elemento sobre a quién puede atribuirse la detención y posterior desaparición.

153. Asimismo, la presencia del Ejército en la zona, descrita por la testigo, prueba de manera coincidente con el Estado que existieron elementos del Ejército realizando labores propias de sus funciones, durante la época de los hechos. Sin embargo, de la declaración de la testigo no se puede concluir que tuviera certeza de la presencia de éstos el día de los hechos. Por el contrario, la señora Sandra Luz asevera nunca haber tenido contacto con éstos.

154. El Estado mexicano destaca que al momento de los hechos no había presencia militar en el Ejido Benito, lo cual ha quedado comprobado con el cúmulo de pruebas enviado a esa Corte,

además de las fatigas militares que prueban que el día de los hechos no se llevó a cabo ninguna acción militar en el ejido mencionado.

155. Por otro lado, respecto del presunto incidente ocurrido a Jaime Alvarado Herrera, nuevamente el testimonio presentado por la señora Rueda Quezada no aporta elementos de convicción, al tratarse de una construcción de hechos, con base en suposiciones. Es decir, a la señora Sandra Luz nunca le constó la manera en que el señor Jaime Alvarado fue agredido, y solamente realiza una aseveración, respecto a que supuestamente el señor Alvarado no tenía enemigos, sin embargo, el presente testimonio no es capaz de dilucidar ni de asegurar las circunstancias de los hechos ni probables responsables.

156. En relación con los hechos descritos por la señora Rueda, respecto del presunto robo ocurrido en su domicilio y el papel que la señora Sandra encontró, el Estado mexicano remite a esa Corte IDH a su contestación enviada el 2 de noviembre de 2017. Al respecto, de conformidad con las pruebas y argumentos presentados en dicha contestación, se desprende que la señora Sandra Luz rindió su declaración en contradicción con la de su vecina, quien señaló que en ningún momento tuvo la certeza de que fueran elementos de la policía federal, solamente realizó esa aseveración al escuchar que hablaban en claves.

157. De igual manera, el Estado resalta, como lo hizo en su contestación y en apartados precedentes, que existen investigaciones vigentes, mismas que fueron iniciadas de manera inmediata a que se tuvo conocimiento de los hechos. Asimismo, no se ha comprobado que los hechos sean atribuibles al Estado mexicano.

158. Finalmente, en relación con el homicidio de Fabián Alvarado, se destaca que a la señora Sandra Luz Rueda Quezada no le constan los hechos, y adicionalmente, el Estado ya ha informado que existen tres personas detenidas por la muerte de Fabián Alvarado, las cuales son presuntamente miembros de la delincuencia organizada.

159. En virtud de lo anterior, el Estado mexicano considera que el testimonio vertido por la señora Rueda Quezada no aporta elementos relevantes que corroboren la existencia de

desaparición forzada en el presente caso.

b) Observaciones a las declaraciones escritas de Deisy Alvarado Espinoza, Mitzy Paola Alvarado Espinoza y Nitza Sitaly Alvarado Espinoza.

160. Sobre las declaraciones vertidas por Deisy Alvarado Espinoza, Mitzy Paola Alvarado Espinoza y Nitza Sitaly Alvarado Espinoza, el Estado mexicano destaca que las declarantes no presenciaron directamente los hechos del 29 de diciembre de 2009.

161. Asimismo, mencionan que el 29 de diciembre de 2009, luego de enterarse de la detención de su mamá, Nitza Paola, Deisy junto con su hermana Sitaly y un amigo de su mamá, de nombre Jorge Loya, salieron en una camioneta para seguir las huellas de llanta de las camionetas que se habrían llevado a sus familiares.

162. Sin embargo, del conjunto de las declaraciones vertidas por los demás familiares, el señor Loya no acudió al domicilio de Nitza Paola, sino que se enteró de los hechos mientras transitaba por el pueblo, momento en el cual habría auxiliado en las labores de búsqueda e incluso habría presentado la primera denuncia. Incluso obra declaración de dicha persona quien responde al nombre de Jorge Luis Loya Sotelo, ante la autoridad ministerial de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitida el 11 de abril de 2017 que corrobora lo antes referido.

163. En ese sentido, es necesario resaltar que de conformidad con todo el acervo probatorio que ha sido remitido a esa Corte IDH, las únicas personas que esa misma noche salieron al pueblo a buscar a las personas desaparecidas, fueron Jaime Alvarado Reyes, en compañía de su padre, con independencia de las búsquedas efectuadas por la policía seccional del Ejido de Benito Juárez a cargo de Mario Castro García

164. Las declarantes también mencionan que el día siguiente de la desaparición, es decir el 30 de diciembre de 2009, Mitzy Paola recibió una llamada en la cual se escuchaba el sonido parecido al de una motosierra y le decían “ya córtale el dedo”, “ya mácala”. Al respecto, el

Estado mexicano desea resaltar que dicha situación no ha sido mencionada con anterioridad, por lo que es la primera vez desde el inicio de las investigaciones que los peticionarios hacen referencia a dicha llamada.

165. Es de suma importancia resaltar el dicho de Mitzy Paola y Nitza Sitlaly, respecto a que tenían conocimiento que el *modus operandi* del Ejército consistía en detener a personas para obtener información y que luego de pocos días los liberaban, el Estado considera que si bien la declarante no sustenta cómo le constaría dicho *modus operandi*, resulta relevante que se tuviera certeza de que el Ejército no desaparecía a gente.

c) Observaciones a las declaraciones del José Ángel Alvarado Fabela.

166. Respecto a la declaración de José Ángel Alvarado Fabela, es importante destacar, en primer lugar, que no fue testigo presencial de los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2009.

167. Asimismo, manifiesta que en una reunión que sostuvo Luz Estela Castro, Rosa Olivia, Obdulia y María de Jesús, en el 35° Batallón de Infantería, con un militar de alto rango, les habrían confirmado que sus familiares habían estado ahí. Sobre el particular, se informa que la reunión de referencia ocurrió el 09 de enero de 2010 en la 5ª Zona Militar a la cual acudió el Gral. Felipe de Jesús Espitia, acompañado del Gral. Elfego José Luján.

168. Al respecto, es importante mencionar que de la declaración se concluye que hacen referencia al General Lohman; no obstante de las declaraciones del mencionado General, ofrecida por el Estado mexicano, se puede observar que en ningún momento dicho funcionario les afirmó que los hoy desaparecidos habían estado en el 35° Batallón.

169. Respecto al dicho del señor José Alvarado sobre las amenazas que hubiere recibido el General Lohmann, el Estado mexicano debe destacar que esos dichos son consideraciones subjetivas que no tienen sustento alguno, pues el cambio del General Lohmann se dio en virtud de que su mandato había concluido y, de hecho, se resalta que actualmente dicho funcionario continúa en activo dentro del Ejército mexicano.

170. Asimismo, el declarante menciona que tienen pruebas de que los responsables por la desaparición de sus familiares son los militares, no obstante el Estado mexicano destaca que de todo el cúmulo de pruebas existentes en la averiguación previa no se puede vislumbrar dicha responsabilidad.

171. Finalmente, el señor Alvarado Fabela manifiesta que luego de la desaparición salió en búsqueda de sus familiares; que habría seguido a dos camionetas a las afueras del ejido y que a pesar de que era de noche y había poca luz logró identificar una de las camionetas como la que utilizaban los militares para trasladarse. Al respecto, el Estado resalta que resulta incongruente que el declarante haya identificado la camioneta que fue usada para llevarse a sus familiares cuando éste no constató el momento de la desaparición, y por lo tanto, no vio la camioneta que fue usada al momento de la detención.

172. Al respecto, se resalta que, tal y como lo menciona el propio declarante, pasaron aproximadamente 15 minutos entre la detención y el inicio de la búsqueda, debido a que una tercera persona (la señora Obdulia) fue quien le informó de lo ocurrido. Por lo que no se puede afirmar que las camionetas que encontró y siguió el señor Alvarado eran las mismas que estaban involucradas con la detención de sus familiares.

d) Observaciones a la declaración de Salomón Baltazar Samayoa.

173. Del presente testimonio, el Estado mexicano presentará observaciones a fin de que sean consideradas por esa Corte IDH al momento de valorarlo.

174. Se advierte que el testigo resalta una serie de observaciones atinentes a atribuir la responsabilidad de la desaparición a elementos militares. Al respecto, se pone de relieve que el testigo fungía en la época de los hechos que reporta como funcionario público, con lo cual, su declaración da cuenta de la labor de investigación del Estado mexicano en la línea de investigación del Ejército.

175. Ahora bien, el Estado señala nuevamente que el mero hecho de que los perpetradores de

la desaparición portaban uniformes tipo militar no es suficiente para acreditar el nexo causal con agentes estatales. En esta tesitura, también se debe considerar el contexto en el que operaba la delincuencia organizada en la época y lugar de los hechos que, como se ha referido con antelación, utilizaban vestimenta apócrifa de fuerzas armadas para proveerse de impunidad;

176. El Estado mexicano reconoce que algunos elementos del 35° Batallón de Infantería han sido investigados e incluso sancionados por actividades ilícitas, incluyendo al Coronel Élfego José Luján Ruíz. Con ello se demuestra que el Estado de ninguna forma obstaculiza la investigación de militares;

177. El uniforme utilizado por los elementos del 35° Batallón de Infantería el día de los hechos difiere del usado por los perpetradores, quienes incluso portaban uniformes de distintos colores y algunos vestían de civil.

178. El Estado mexicano también ha acreditado que no existió presencia militar en el lugar y día en que ocurrieron los hechos.

179. Se destaca que el informe realizado por el General de Brigada Lohmann se realizó con base en los testimonios de militares, familiares, funcionarios públicos y vecinos. Asimismo, se recuerda que los familiares refieren haber tenido acercamientos positivos con dicho General para efectos de que los apoyara en las investigaciones, lo cual fortalece la credibilidad de lo vertido en el informe del General.

180. La declaración del chofer del Coronel Élfego José Luján Ruíz se basa en lo que escuchó por medio de la radio, no así en hechos que le constaran.

181. El Estado mexicano destaca que si bien en su momento no se autorizó la orden de aprehensión en contra del Coronel Élfego José Luján, ello no debe interpretarse como una negativa por parte del Estado a investigar la posible participación del Ejército en el presente caso, más aún es de señalar que la propia legislación de la materia señala: *”Si el Juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los*

requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente”, siendo que al día de la fecha como se ha sostenido la investigación continúa abierta

182. Asimismo, se pone de relieve una vez más que se han procesado a los elementos del 35° Batallón de Infantería que han cometido ilícitos, incluyendo al propio Coronel Élfego José Luján.

183. Por otro lado, el análisis de derecho penal internacional que realiza el testigo durante su declaración escrita resulta inoperante para efectos del análisis que esa Corte IDH realice en torno a la probable responsabilidad estatal. Lo anterior, en atención a que esa Corte Interamericana únicamente puede pronunciarse sobre la responsabilidad estatal y no es competente para determinar responsabilidades penales.

184. Al margen de lo anterior, el Estado mexicano estima que la declaración presentada por Salomón Baltazar deberá ser analizado a la luz y en contraste del material probatorio que ha presentado el Estado mexicano

e) Observaciones a la declaración de Rosa Olivia Alvarado Herrera.

185. El Estado mexicano destaca que la testigo no presenció directamente los hechos, y en todo caso, la versión de los mismos fue obtenida por terceras personas.

186. Asimismo, se resalta de manera muy respetuosa que a nivel interno la testigo ha rendido declaraciones realizando conclusiones que no le constan, y que de hecho se contradicen con testimonios directos. Por ejemplo, se destaca la declaración de la testigo, rendida ante autoridades ministeriales en enero de 2011, quien refirió tener conocimiento que el papá de su hija GERARDO RAMÓN habría sido detenido y golpeado por los soldados en el pueblo de Ejido Benito Juárez, en el mes de diciembre del año 2009.

187. Sin embargo, de las pruebas documentales con las que se cuentan y de la declaración del

directamente implicado, se tiene acreditado que éste nunca fue trasladado a una base militar y, contrariamente, habría sido detenido por elementos de la Policía Federal debido a hechos ajenos a este caso, habiendo sido únicamente puesto a disposición ante el Ministerio Público del fuero común su hermano en virtud de encontrarse en posesión de un vehículo robado.

188. Por lo tanto, el Estado mexicano solicita que esa Corte Interamericana desvirtúe el testimonio de la señora Rosa Olivia Alvarado Herrera por carecer de conocimiento directo de los hechos, o bien, que tome con cautela el nivel probatorio que lo otorga, a la luz de las contradicciones en las cuales ha incurrido durante las investigaciones.

f) Observaciones a la declaración del señor Adrián Alvarado Reyes.

189. Sobre la presente declaración el Estado observa que al momento de presenciar los hechos, tal y como lo dice el declarante, tenía 13 años. Sin embargo éste refiere que logró identificar a los perpetradores del crimen como militares debido a que el armamento que portaban dichos hombres era distinto al que usaba normalmente la delincuencia organizada, sin explicar cómo pudo identificar tal diferencia en el armamento y contar con tal grado de experticia a dicha edad.

190. Más aún, refiere que otra razón por la cual pudo saber que eran soldados, se debió a su acento, toda vez que no era típico de la región. Lo anterior considerando que, a su dicho, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en el baño y la entrada de dicho grupo de personas a su casa le generó un gran impacto.

191. En ese tenor, el Estado considera que las apreciaciones que realiza el declarante son meramente subjetivas y observa que las dos informaciones ahora expuestas ante la Corte IDH, no fueron referidas en las primeras declaraciones ante las autoridades, en las cuales refirieron consistentemente que pensaban que las personas que entraron a su casa eran militares, toda vez que portaban uniformes castrenses.

192. Finalmente, es importante mencionar que el declarante refiere que él, ni su familia,

habrían recibido medidas de protección, sin embargo es un beneficiario de las medidas provisionales dictadas por ésta Corte IDH, en las cuales el Estado ha informado en diferentes ocasiones las medidas implementadas a favor de los beneficiarios.

g) Observaciones a la declaración del señor Alan Rafael Alvarado Reyes.

193. Sobre la presente declaración, el Estado observa que el declarante refiere haber visto una camioneta de diésel con cabina y media, de la cual no está seguro si ésta era gris o negra, ni de su marca, afuera de su casa y de la cual descendieron las personas que se llevaron a su hermana Rocía Irene.

194. Asimismo, menciona que vio dicha camioneta, de la cual no está seguro de su color y no aporta mayores especificaciones, en una planta en la que jugaba béisbol, así como en algún Ministerio Público en Casas Grandes.

195. Al respecto, el Estado observa que el dicho del declarante no se sustenta con ninguna otra prueba del expediente y es algo que nunca refirió en sus primeras declaraciones a nivel interno; a la par que la poca claridad que manifiesta tener en torno a la camioneta es incongruente con el grado de certeza que menciona tener sobre haber identificado una de las camionetas de manera posterior.

196. Finalmente, al igual que su hermano, el declarante refiere que ni él, ni su familia, habrían recibido medidas de protección, sin embargo es un beneficiario de las medidas provisionales dictadas por ésta Corte IDH, en las cuales el Estado ha informado en diferentes ocasiones las medidas implementadas a favor de los beneficiarios.

h) Observaciones a la declaración de Obdulia Espinoza Beltrán.

197. En torno a la presente declaración, el Estado resalta que la declarante refiere que identificó a las personas que cometieron la desaparición como militares únicamente debido a que éstos portaban uniforme tipo militar. A la luz de los argumentos que el Estado ha presentado, se puede concluir que el hecho de que los sujetos portaran ese tipo de vestimenta no es suficiente

para concluir que en efecto se trataba de agentes estatales.

198. Por otra parte, es importante precisar que la declarante nunca presenció los supuestos dichos de las autoridades ministeriales, relacionados con que el Ejército tenía a las personas hoy desaparecidas, por lo cual no es una testigo directa. Asimismo, de acuerdo a su dicho, a ella no le consta directamente la presencia de elementos del Ejército en el Hotel Los Arcos.

199. Ahora bien, respecto al General Lohmann, el Estado precisa que éste efectivamente investigó los hechos y concluyó que no hubo participación militar, sin que en ningún momento fuera removido de su puesto, hasta la actualidad.

200. Finalmente, es importante mencionar que la declarante refiere que ni ella, ni su familia, habrían recibido medidas de protección; sin embargo, es una de las beneficiarias de las medidas provisionales dictadas por ésta Corte IDH, en las cuales el Estado ha informado en diferentes ocasiones las medidas implementadas a favor de los beneficiarios.

C. Observaciones a Peritajes orales.

a) Observaciones al peritaje presentado por Federico Andreu.

201. El Estado mexicano observa que si bien el perito hizo mención diversos estándares internacionales en materia de desaparición forzada, en su presentación quedó de manifiesto que no tenía un conocimiento profundo de la situación en México, los reportes de seguimiento enviados por el Estado a los múltiples mecanismos internacionales de derechos humanos, ni de las investigaciones que ha llevado el Estado respecto de los hechos del caso.

202. En primer lugar, las estadísticas consideradas por el perito al momento de señalar los índices de violencia en Chihuahua se encuentran desactualizados, toda vez que únicamente refirió cifras reflejadas hasta los años 2011 y 2012, además de no haber citado fuentes oficiales o dar una explicación o contraste, del por qué éstas no serían importantes para un peritaje en la materia.

203. A pregunta explícita del Estado, desconoció diversos datos oficiales relevantes como la disminución por más de 80% de quejas presentadas ante la CNDH en contra de las fuerzas armadas. En este sentido, argumentó que la disminución de quejas no necesariamente representa una disminución en la comisión del ilícito; sin embargo, siguiendo la lógica del mismo perito, la mera presentación de quejas tampoco significaría una responsabilidad del Estado por los hechos, ya que deberá de desahogarse en los términos legales y así arribar a determinaciones conclusivas.

204. Más aún, el perito dijo desconocer todos los cambios legislativos e institucionales desarrollados por el Estado mexicano en materia de desaparición forzada como la Ley de carácter general, la cual prevé, entre otras cosas, la creación de una fiscalía especializada robusta, protocolos homologados y específicos de actuación en términos de búsqueda y de investigación, de un registro nacional de personas desaparecidas, un banco genético con interconexión, el mecanismo de apoyo exterior para migrantes desaparecidos y un sistema participativo de búsqueda, con la creación de una comisión específica e integración por miembros de sociedad civil, familiares y expertos en la problemática.

205. Ahora bien, en torno a las investigaciones, el perito comentó que tenía conocimiento sobre la situación de las indagatorias hasta el año 2014. No obstante lo anterior, declaró que una vez que los hechos fueron investigados por la jurisdicción militar, se abandonó la línea de investigación en torno a la responsabilidad del Ejército.

206. El Estado observa que dicha afirmación, la cual es fundamental en el presente caso, es totalmente incorrecta, lo cual demuestra su desconocimiento de las investigaciones. Posteriormente a que los hechos fueron investigados por la Procuraduría Militar, las autoridades ministeriales civiles continuaron investigando la posible responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso, se ejerció acción penal contra uno de los integrantes del 35 Batallón de Infantería. Incluso, la agente del Ministerio Público hoy a cargo de la investigación, quien rindió su declaración ante la Honorable Corte, explicó que la línea de investigación relacionada con Ejército ha sido la más desarrollada.

207. Asimismo, el Estado resalta que el perito reconoció no contar con la información actualizada respecto de las investigaciones del caso, ya que habría tenido acceso únicamente a los expedientes anteriores a 2013 o 2014. Lo anterior, evidencia el desconocimiento del perito respecto de las investigaciones a cargo del Estado. Ello resulta aún más determinante ya que, fue precisamente en ese mismo período en que las investigaciones fueron concentradas en la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, impulsándose diligentemente las investigaciones y profundizando en las tres líneas de investigación abiertas.

208. Por otra parte, al ser cuestionado por el Juez Sierra Porto sobre cómo evaluar la eficacia de una investigación de desaparición forzada, el perito se limitó a mencionar formas de investigación, como el estudio del contexto (el cual ha sido analizado en el marco de las investigaciones del caso), sin aportar criterios de cómo evaluar dichas formas de investigación. Al respecto, el Estado reitera lo expresado tanto en su contestación, como durante la audiencia, respecto de que éste ha analizado el contexto de la región numerosas veces para entender el comportamiento de todos los actores presente en el estado de Chihuahua al momento de los hechos. Incluso ha analizado las redes de vínculos de un gran número de presuntos involucrados, al igual que los *modus operandi* de diversos grupos al cometer delitos, tal como se desprende de las declaraciones escritas de Efraín Arzola Herrejón y José Emilio Serrano Santiago.

209. Finalmente, en atención a diversas preguntas por parte de la Representación sobre la Ley de Seguridad Interior expedida en el 21 de diciembre de 2017, el Estado recuerda que ésta no es objeto de la presente *Litis* debido a que es una regulación que no existía al momento de los hechos, por lo cual no fue aplicada a éstos. En ese sentido, esta Corte IDH no debe revisar e interpretar una legislación en abstracto, la cual no fue aplicada a los presentes hechos y el Estado no la ha argumentado como base legal de ninguna de sus acciones.

b) Observaciones al peritaje presentado por el Dr. Salvador Salazar Gutiérrez.

210. En el peritaje se expusieron los impactos sociales del Operativo Conjunto Chihuahua en aras de poder construir un contexto en el cual sucedieron los hechos. Al respecto el Estado

presentará tres observaciones puntuales al respecto.

211. Primero, el perito expuso que la situación de la delincuencia del crimen organizado se ha agravado por la falta de presencia del Estado en el estado de Chihuahua, teniendo como consecuencia un sentimiento de indefensión por parte de los ciudadanos. En torno a este punto, el Estado reitera que uno de los objetivos del objeto del Operativo Conjunto Chihuahua fue precisamente recuperar la presencia del Estado en dicha zona y poder implementar políticas de seguridad efectivas en beneficio de todos los ciudadanos.

212. Dicho operativo constó de tres etapas, en las cuales se dotó de ayuda a las autoridades estatales para atender la situación de violencia. En ese sentido, se debe destacar que el apoyo proporcionado por el Gobierno Federal no únicamente constó de elementos militares, sino también ministerios públicos, peritos, trabajadores sociales y otros funcionarios para mejorar la administración de justicia. Dentro de la segunda etapa, tras una revisión conjunta entre sociedad y Estado de la estrategia, la ayuda fue de carácter policial y de ministerios públicos por parte de la PGR para mejorar la investigación de los delitos. Finalmente, la tercer etapa fue para implementar medidas de carácter social y recuperación de espacios público.

213. En ese sentido, el Estado desea resaltar que el Operativo Conjunto Chihuahua tuvo como misión atender aquello que el propio perito describió como un problema fundamental en el contexto del presente caso, que es la falta de presencia estatal en la región.

214. Ahora bien, el Estado es consciente de que toda acción que implemente, como el operativo en comento debe contar con ciertas salvaguardas. En ese tenor, como segundo punto, el Estado recuerda que el perito expuso que en el presente operativo se “militarizó” al estado de Chihuahua debido a que se sustituyó a los poderes civiles por fuerzas militares.

215. Al respecto, el Estado señala que el término militarización no aplicable al caso en concreto. En primer lugar, las autoridades y estructuras estatales, como el gobernador, el poder judicial y las propias policías continuaron siendo de carácter civil. En ese sentido, si bien las autoridades federales (lo cual incluyó, entre otros cuerpos de seguridad, a las fuerzas militares)

coadyuvaron (a manera de coordinación) con las autoridades locales, esto fue únicamente en su tarea de seguridad, sin que las fuerzas armadas suplantarán las funciones gubernamentales.

216. Se destaca que lo anterior fue necesario en razón del contexto que se vivía en la zona, como parte de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar seguridad a la población en general y mantener el Estado de Derecho.

217. Tercero, el perito comentó que la delincuencia organizada es un problema histórico en la región y en todo el país. Lo anterior significa que para poder evaluar los impactos sociales de la violencia en el estado de Chihuahua es fundamental entender, por un lado, las acciones desplegadas por el Estado, pero particularmente las acciones de la delincuencia organizada que son la raíz de dicha violencia y lo que detona la necesidad de presencia federal (incluida en ocasiones la militar).

218. En ese tenor, si bien es cierto que el objetivo del peritaje era explicar los impactos sociales del Operativo Conjunto Chihuahua, el Estado considera que dicho impactos no pueden ser estudiados ni examinar todos los factores, si no se toma en cuenta el problema histórico de la presencia de la delincuencia organizada. Particularmente, no se puede atribuir toda la violencia únicamente a las acciones del Estado, de frente a la falta de análisis sobre los grupos delincuenciales en la región de un panorama incompleto.

219. En este sentido, si bien el objeto del peritaje era analizar “las distintas formas de violencia en Chihuahua”, el Estado considera que esto no fue tratado efectivamente por el perito, en tanto se evadió cualquier análisis o mención en torno a las violencias generadas por la delincuencia organizada, lo cual provoca una perspectiva sesgada del fenómeno y una falta de comprensión de la situación en general de Chihuahua durante los hechos del caso.

220. Es por lo anterior que el Estado considera que el presente peritaje no construye un contexto exacto respecto del estado de Chihuahua e ignora factores fundamentales del mismo.

c) Observaciones al peritaje presentado por el Estado mexicano.

221. Respecto al peritaje desarrollado por el Dr. Carlos Ulloa, el Estado considera de especial relevancia destacar el contexto y el alcance del mismo.

222. Como se expuso en la sección anterior, los peritajes presentados por la Comisión IDH y la Representación se centraron únicamente en examinar las medidas del Estado para garantizar la seguridad pública como lo fue el Operativo Conjunto Chihuahua. No obstante lo anterior, omitieron analizar la raíz del problema de la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada y sin la cual queda incompleta el contexto entero del estado de Chihuahua.

223. La presencia de la delincuencia organizada en esta zona del país data a la década de los ochentas y noventas, en las cuales se comenzó a utilizar como un corredor para el trasiego de drogas a los Estados Unidos y de armas de fuego hacia México.

224. Con el paso del tiempo las grandes corporaciones criminales se han enfrentado por el control del territorio, utilizando grupos o células armadas las cuales se han caracterizado por el uso de la violencia. Dicho grupos, entre los cuales sobresale “La Línea”, tienen como fin controlar ciertas plazas y para lograrlo combaten tanto a autoridades estatales, como carteles rivales, además de intentar intimidar a la población civil.

225. Como se explicó en la contestación del Estado, dicho grupos delincuenciales han utilizado los llamados “levantones”, los cuales consisten en la detención de una persona y su posterior desaparición.

226. Lo anterior es de gran relevancia para tener una visión completa sobre todos los actores presentes en la zona y la importancia e impacto que ha tenido de delincuencia organizada sobre la violencia en contra de la población civil.

227. Ahora bien, es importante destacar lo expresado por el perito y secundado por diversas fuentes, en torno al uso de uniformes oficiales por parte de los grupos delincuenciales en la comisión de los delitos.

228. Debe destacarse que el objetivo del peritaje no fue realizar un análisis de las acciones

investigativas del Estado mexicano en el decomiso y confiscación de uniformes tipo militar por parte de la delincuencia organizada. Por el contrario, su estudio se basó únicamente en fuentes públicas en torno al contexto delincriminal, con particular énfasis en el uso de uniformes e insignias oficiales para permanecer en la impunidad.

229. Al respecto, el Estado resalta que dicha información pública presentada por el perito, se encuentra robustecida y confirmada por la información oficial presentada por el Estado, el análisis realizado por el CENAPI, la declaración escrita de José Emilio Serrano Santiago, la declaración rendida en la audiencia pública por la agente del Ministerio Público Mariana Colín y por las propias averiguaciones previas iniciadas por autoridades mexicanas.

230. De esta manera, una vasta confiscación de uniformes por parte de diversas autoridades tanto a nivel federal, como estatal, confirma que existe un uso de uniformes oficiales y otros aditamentos por parte de los grupos delincuenciales, no únicamente en el Estado de Chihuahua, sino en diversas entidades federativas. Esta información fue acompañada de la contestación del Estado al ESAP.

231. El uso de uniformes oficiales ha sido documentado con diversas detenciones e incautaciones de uniformes robados y apócrifos, tanto en el municipio de Buenaventura, como municipios aledaños y el resto del estado. Es por ello que el Estado considera que el uso de uniformes forma parte del *modus operandi* de los diversos grupos delictivos y debe ser considerado como parte del contexto. Además ha sido señalado que dicho municipio fungía como bastión del grupo delictivo, por lo cual la inclinación a no dejar rastro de actividades ilícitas es mayor.

232. De esta manera, el Estado resalta que este contexto es comprobado de manera clara e irrefutable en el estado de Chihuahua durante los hechos del caso, mediante los datos objetivos ofrecidos en la contestación, la declaración escrita de José Emilio Serrano Santiago, el estudio del CENAPI, la declaración rendida en la audiencia pública por la agente del Ministerio Público Mariana Colín, las averiguaciones previas y decomisos llevados a cabo por el Estado, así como

por el estudio de fuentes abiertas presentado por el perito.

233. Particularmente, el decomiso en Buenaventura de 4 uniformes, 2 gorras, 2 equipos de comunicación y cartuchos calibre 38, confirma que también en este municipio se ha actualizado el mismo contexto general.

234. Sobre este tema, el Estado pone de relieve que el contexto está comprobado en Chihuahua, lo cual incluye el municipio de Buenaventura, por lo que el hecho de que sólo haya existido en dicho municipio en particular un decomiso, no debe significar que el contexto no aplicaba para ese municipio. Particularmente, se resalta que dicha metodología o análisis dista de los estándares que ha aplicado esa Corte para corroborar la existencia de contextos en específico, destacando lo siguiente:

- El estudio de una región es mucho más relevante que una delimitación territorial/política en particular; y, para este caso, en la región en donde se llevaron a cabo los hechos es claro el uso de vestimenta tipo militar por parte del crimen organizado.
- Negar la existencia de este contexto para el municipio de Buenaventura, argumentando que no han existido numerosos decomisos en ese municipio en particular, implicaría que una delimitación política tiene más relevancia que el estudio de una región en particular, no importando que la delimitación entre un municipio y otro sea de pocos o muchos metros. Ello, resultaría ser un análisis sumamente subjetivo y poco serio.
- Asimismo, no debería aplicarse al Estado mexicano un estándar así de riguroso, que no se ha sido seguido en las sentencias de esa Corte IDH. De ser el caso, siguiendo la misma lógica, se resalta que ni la CIDH ni la representación han comprobado que en el Municipio de Buenaventura se hubieran presentado una sola desaparición forzada por parte del Ejército durante los hechos del caso.

235. A la luz de lo anterior, el Estado mexicano solicita que se considere la información vertida por el perito a efectos de corroborar el contexto presentado por éste.

D. Observaciones a los Peritajes escritos enviados por la Representación y a los amici curiae.

236. El artículo 44(3) del Reglamento de la Corte IDH establece que en los casos contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de *amicus curiae* hasta 15 días después de la celebración de la audiencia pública. La doctrina reconoce que los *amici curiae* buscan contribuir a la deliberación de algún tribunal internacional a través de la presentación de consideraciones de interés público⁴.

237. Asimismo, de conformidad con el artículo 40.2 c) al momento de ofrecer sus declarantes y peritajes, la representación de las víctimas deberá señalar la identidad del declarante o perito, así como el objeto de su testimonio o peritaje. En ese sentido, todo testimonio o peritaje que exceda el objetivo planteado anteriormente deberá ser desestimado por esta honorable Corte.

238. Dado que el Reglamento de la Corte no contempla la presentación de argumentos en respuesta a los *amici curiae* —como es el caso de otros tribunales internacionales⁵— el Estado mexicano considera que con el fin de mantener el equilibrio procesal de las partes, la evaluación del contenido de éstos por parte de la Corte debe estar sujeto al principio general de derecho *non ultra petita*⁶, el cual prevé que los tribunales internacionales no tienen el poder de pronunciarse y ordenar reparaciones sobre cuestiones que no fueron presentadas oportunamente por las partes.

239. En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte ha determinado que el marco fáctico de un caso se constituye por el informe de fondo sometido a su consideración⁷, y por lo tanto, no es posible que se aleguen nuevos hechos distintos a los

⁴ Romano, Cesare *et. al.* (eds.) The Oxford Handbook on International Adjudication, Reino Unido, 2014, OUP, p.821

⁵ Corte Penal Internacional, Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla 103(2)

⁶ ICJ, *Asylum Case (Colombia/Peru)*, Judgment, 20 November 1950, ICJ Reports., para. 402

⁷ Corte IDH, *Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia*. Sentencia de 14

contenidos en aquél⁸. Este razonamiento puede ser aplicado al contenido de los peritajes presentados por la Representación y por los *amici curiae* presentados por (i) Washington Office for Latin America; (ii) ELEMENTA Consultoría en Derechos Humanos; y (iii) el Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Colombia, en los que se exponen cuestiones que escapan el marco fáctico de la *litis* del presente caso.

240. De igual manera, tal y como se abordará en secciones particulares, se resalta que los peritajes presentados por la Representación abordan temáticas que van más allá de la *litis* planteada en el informe de fondo de la CIDH y/o del objeto que fue establecido por esa Corte IDH en su resolución en torno a las pruebas ofrecidas por las partes, o incluyen pruebas adicionales que no fueron enviadas en el momento procesal oportuno por la CIDH ni por la Representación.

241. Por lo anterior, el Estado mexicano solicita respetuosamente a la Corte IDH que desestime el contenido de los *amici curiae* y de los peritajes presentados por la Representación que pretenden introducir nuevos hechos a aquéllos presentados por la Comisión IDH en su informe de fondo o, en caso de los peritajes, que exceden al objeto determinado por esa Corte IDH.

a) Observaciones al peritaje presentado por Carlos Martín Beristain.

242. En relación con el peritaje expuesto por Carlos Martín Beristain, referente al impacto psicosocial en la familia de las personas desaparecidas y sobre las propuestas para abordar la situación en casos similares, el Estado mexicano sostiene que no niega el impacto que pudo haber causado a los familiares la desaparición en sí misma.

de noviembre de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 47

⁸ *Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 153, y *Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 38.

243. Sin embargo, se considera que el peritaje presentado hace aseveraciones destinadas a “comprobar” la existencia de la desaparición forzada de las tres personas y de su atribución al Estado mexicano; lo cual excede el objeto que ha sido determinado por esa Corte IDH. Asimismo, mediante el peritaje se introducen pruebas que no fueron rendidas ante la Corte en su momento procesal oportuno, tales como declaraciones de familiares, por lo que deben ser desestimadas.

244. Particularmente se destaca lo siguiente:

- El perito busca corroborar la responsabilidad del Estado por las diversas violaciones de derechos humanos alegadas, lo cual excede del objeto de su peritaje.
- El Estado considera que de la descripción de diligencias de búsqueda, así como los nuevos testimonios externados en las entrevistas, no forman parte del objeto del peritaje, por lo que se solicita a esa Corte IDH que no sean tomados en cuenta.
- En relación con el apartado “4.7. Amenazas, hostigamiento y desplazamiento forzado”, se relatan hechos adicionales que, nuevamente no fueron establecidos ni en el informe emitido por la Comisión IDH, ni en el ESAP de la representación, ni durante el desarrollo del procedimiento en el Sistema Interamericano.
- El perito parte y sostiene la existencia de desaparición forzada en el presente caso, lo cual excede al objeto de su peritaje.

245. En consecuencia, el Estado mexicano solicita que excluya las partes del peritaje que exceden al objeto delimitado por esa Corte IDH.

b) Observaciones al peritaje presentado por el Dr. Alejandro Madrazo Lajous

246. En torno al presente peritaje, el Estado tiene dos observaciones principales que van directamente vinculada al fondo del mismo.

247. En primer lugar, en el caso *Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*, la Corte IDH

examinó la política de seguridad en México y la coadyuvancia de las fuerzas armadas, determinando que el Estado puede diseñar sus propias políticas públicas y que no le corresponde a la Corte IDH pronunciarse al respecto. Resaltando que el Estado debe respetar sus obligaciones convencionales y no cometer violaciones a derechos humanos.⁹

248. Es decir, que la Corte IDH si bien determinó que existen límites al desarrollo de políticas públicas, además de una obligación de imponer ciertas salvaguardas, en ningún momento determinó que el uso de personal militar en tareas de seguridad pública está prohibido conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

249. El presente peritaje examina la política del Estado de manera general aterrizada al contexto del estado de Chihuahua al momento de los hechos. En ese sentido, el Estado resalta que en el presente caso no se encuentra en discusión la política de seguridad del Estado y su implementación a nivel nacional, sino los hechos ocurridos a las personas desaparecidas del presente caso.

250. Más aún, gran parte del peritaje se enfoca en discutir los procesos legislativos (incluso algunos realizados después de acontecidos los hechos) de las normas que fundamentan dicha política. Lo anterior, es algo que escapa las competencias de la Corte IDH y no abona al contexto de lo ocurrido en el norte del país al momento de los hechos.

251. Ahora bien, es importante hacer notar que el perito menciona que el problema de seguridad no fue bien identificado por el Estado y que su política no presentaba un mecanismo de fiscalización. Al respecto, tal y como fue expuesto a esa Corte IDH en la audiencia pública, no sólo por el Estado, sino por la Representación y los peritajes presentados por la misma, el problema de la delincuencia organizada se remonta a muchos años atrás y su fuerte presencia

⁹ Corte IDH. Caso *Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 64, 83-89.

ha sido estudiada y cuantificada tanto por autoridades estatal, como de la sociedad civil y organismos internacionales. No debe dejarse de observar que la política de seguridad del Estado responde a una necesidad de atender un problema grave que no únicamente impacta la vida pública, sino que ha trascendido a un reto mayor.

252. Por otra parte, sobre los mecanismos de fiscalización, es importante mencionar que la implementación de la política implementada por el Estado, siempre ha sido seguida de cerca y se ha rendido cuentas por el Gobierno mexicano. Un ejemplo de lo anterior son los informes de gobierno, en los cuales el entonces Presidente de la República se pronunció y rindió cuentas sobre la política de seguridad ante el Poder Legislativo.

253. En ese tenor es importante resaltar que el perito en ningún momento define un término tan amplio como es el de “militarización”, algo fundamental para el presente peritaje. En el marco de la presente política de seguridad, las fuerzas armadas estuvieron en todo momento supeditadas a la autoridad civil y el comandante en jefe de las mismas siempre ha sido el presidente. Incluso, el propio perito reconoce que los operativos militares en las entidades federativas se llevaron de forma conjunta con los gobiernos locales, en los cuales el gobernador siempre fue la autoridad suprema, y el gobierno federal.

254. En segunda lugar, el Estado observa que gran parte del peritaje se enfoca a pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior.

255. Sin perjuicio de los argumentos expuestos por el Estado en torno a que dicho instrumento no debe ser analizado por la Corte IDH, debido a que fue publicado de forma posterior a los hechos, el Estado también observa que en su nota CDH-14-2016/055 del 6 de abril de 2018, la Corte IDH determinó que el perito debía pronunciarse sobre la política de combate a la delincuencia organizada, que era el objetivo original de su peritaje, desestimando la solicitud de la representación de que éste se pronunciara sobre la Ley de Seguridad Interior, debido a que dicho objetivo no habría sido determinado en la etapa procesal oportuna.

256. En virtud de lo anterior, cualquier mención a la Ley de Seguridad Interior excede el

objeto delimitado por esa Corte IDH, por lo que debe ser desestimado.

c) Observaciones al peritaje presentado por el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense

257. Respecto del presente peritaje, el Estado mexicano desea manifestar que en ningún momento se tuvo un contexto de militarización en Chihuahua, incluso durante la implementación de operativos concretos como el Operativo Conjunto Chihuahua.

258. En esta tesitura, se pone de relieve que el papel que desempeñaron las fuerzas armadas durante esos operativos eran de coadyuvancia a las autoridades estatales y federales del orden civil. Es decir, las fuerzas armadas de ninguna forma suplantaron a las autoridades civiles en obligaciones atinentes a seguridad pública.

259. Por ello, un contexto de militarización, como el que se busca acreditar con el presente peritaje, dista de la realidad fáctica de los operativos concreto, como el Operativo Conjunto Chihuahua. Incluso, se destaca que en éste último, se tenían instancias especiales para que las personas que hubiesen sido víctimas de abusos por parte agentes estatales, presentaran quejas, claro ejemplo de ello lo es el “Programa para la Atención de Quejas y Denuncias del Operativo Conjunto Chihuahua”.

260. Ahora bien, con respecto a posibles violaciones atribuibles a las Fuerzas Armadas, se pone de relieve que el Estado mexicano ha implementado una serie de medidas para prevenirlas, las cuales han sido expuestas en diferentes etapas procesales de este procedimiento.

261. Por otro lado, se recuerda que el objeto del peritaje del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), es presentar el contexto de militarización y graves violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército mexicano en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, especialmente en el norte del Estado de Chihuahua.

262. En esta tesitura, se observa que el escrito del peritaje incluye un apartado de recomendaciones en donde el GIASF presenta una propuesta de reparaciones para el presente

caso. Al respecto, el Estado mexicano aclara que las reparaciones propuestas escapan del objeto del peritaje, por lo cual no deben ser consideradas por la Corte IDH.

263. Al margen de lo anterior, el Estado mexicano solicita que los peritajes analizados en el presente escrito, así como los presentados durante la audiencia, sean evaluados considerando el peritaje presentado por el Estado mexicano. Su análisis conjunto permitirá conocer un contexto de la situación de seguridad pública y violencia que existió en el lugar y época de los hechos.

E. Observaciones a los alegatos finales de la representación.

264. En la presente sección, el Estado mexicano realizará observaciones a algunas aseveraciones que la Representación realizó durante su exposición de argumentos finales. No se omite señalar que algunos rubros ya han sido o serán abordados en otras secciones del presente escrito.

a) Investigaciones.

265. La Representación argumentó que existen violaciones al artículo 8 y 25 de la CADH en virtud de que no se habrían realizado investigaciones inmediatas y objetivas. En esta tesitura, el Estado mexicano presentará una serie de observaciones a los comentarios vertidos por la representación con respecto al tema de investigaciones.

266. Al respecto, el Estado mexicano reconoce que en efecto, antes de 2013, se tenía un cúmulo de investigaciones ante diversas representaciones sociales. Dicha situación se debió a que los familiares y sus representantes presentaron denuncias ante diversas instancias, lo cual evidencía que se iniciaron investigaciones de manera inmediata, lo cual derivado a la complejidad del asunto no hizo posible la pronta declinación de las investigaciones a una sola autoridad en específico. Resaltando que, en esa época aún no existía la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual concentro en un solo expediente todas las investigaciones previas en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos.

267. Por supuesto, el Estado observa que una vez que se creó dicha Unidad, fue que se

impulsaron de manera adecuada y diligente las investigaciones del caso, fortaleciendo lo previamente actuado y ahondando en las tres líneas de investigación y acciones de búsqueda.

268. El Estado mexicano también destaca que, contrario al dicho de la Representación, Obdulia Alvarado Espinoza ha participado en las investigaciones del presente caso mediante las siguientes declaraciones, mismas que se incluyen como anexo de la respuesta del Estado mexicano:

- ✓ Anexo 22 - Declaración de Obdulia Espinoza Beltrán del 10 de junio de 2010, ante el Subdirector de Manejo y Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
- ✓ Anexo 23 - Declaración de Obdulia Espinoza Beltrán del 16 de enero de 2013, ante la Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo de la Agencia Décima Primera Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”.
- ✓ Anexo 24 - Comparecencia de Obdulia Espinoza Beltrán del 27 de octubre de 2014, ante el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- ✓ Anexo 25 - Comparecencia de Obdulia Espinoza Beltrán de 10 de junio de 2015, ante el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

269. Asimismo, el Estado hace notar que incorporó las 65 recomendaciones puntuales hechas por el Equipo Internacional de Peritos a las investigaciones realizadas por la PGR, las cuales hoy son parte de las líneas de investigación abiertas. En ese sentido, se informa que se han realizado diligencias que atienden directamente cada una de las recomendaciones realizadas, a la par que se destaca que muchas de ellas ya estaban siendo atendidas por la PGR, en el marco de las tres líneas de investigación.

270. Al margen de lo anterior, el Estado mexicano reitera a esa Corte IDH que una vez que

las investigaciones se acumularon en una sola, éstas se han realizado de manera diligente dentro de las tres líneas de investigación que actualmente se desarrollan.

b) Valoración de pruebas.

271. La Representación afirma que el Estado mexicano confunde el estándar de la prueba que se utiliza para atribución de responsabilidad estatal

272. Al respecto, la Corte IDH debe atender los principios de derecho internacional al momento de evaluar la evidencia presentada. La presentación de alegatos y evidencia tienen por objeto asegurar una adecuada administración de justicia, y una justa e igual oportunidad para que cada una de las partes haga valer sus pretensiones¹⁰. Lo anterior obedece al principio de un debido proceso.

273. De acuerdo con la jurisprudencia internacional, las partes dentro de una disputa deben cooperar con el Tribunal o Corte que conoce del caso proporcionando la evidencia necesaria¹¹.

274. Es necesario que la regla que se utilice para valorar la evidencia sea aquella que es empleada en todos los sistemas jurídicos internacionales como lo es la de la sana crítica, que de ninguna manera es ajena al Sistema Interamericano¹².

275. En el presente caso, las partes proporcionan a esa Corte IDH un gran cúmulo de evidencia, la cual incluso es retomada por la parte actora y demandante. Se destaca que en ciertos casos, la CIDH y la Representación utilizan de manera parcial ciertos testimonios o pruebas documentales y omiten la consideración de la evidencia en su conjunto, misma que contiene

¹⁰ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 26.

¹¹ *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 17; *George Pinson Case (France v. Mexico – 1928)*, 5 UNRIAA at p. 413;

¹² Corte IDH. *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. párr. 55; Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. párr. 26; Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 54.

pronunciamientos desfavorables a sus pretensiones.

276. Asimismo, se destaca que la CIDH y la Representación utilizan un cúmulo sustancial de pruebas documentales y testimoniales para respaldar sus pretensiones, tendentes a atribuir responsabilidad internacional al Estado mexicano por supuestas conductas.

277. El Estado mexicano ha identificado dentro de las mismas pruebas invocadas por la CIDH y la Representación, posicionamientos que apoyan las conclusiones del Estado mexicano tanto en cuestiones fácticas como jurídicas.

278. Por lo tanto, el Estado mexicano considera que la Corte IDH, al momento de analizar la evidencia vertida por las partes en el presente caso, deberá considerar la fuente de las mismas, los análisis probatorios que se han realizado en tenor a ellas, y las circunstancias que las rodean. Lo anterior a la luz del principio de debido proceso.

279. Ahora bien, respecto del estándar empleado por esa Corte para determinar la posible responsabilidad del Estado, se destaca que éste entiende la diferencia entre el estándar de responsabilidad estatal y el de responsabilidad penal individual.

280. De ninguna manera, el Estado pretende aplicar un estándar de derecho penal para los hechos de este caso. De manera contraria, el Estado sostiene que de conformidad con el acervo probatorio con el que cuenta esa Corte IDH no es posible concluir la responsabilidad de éste, en razón de que no pueden ser atribuibles los hechos alegados a agentes estatales.

281. Lo anterior, es independiente de la obligación de investigar las responsabilidades penales a cargo del Estado, y respecto de lo cual (de manera congruente) siguen abiertas las tres líneas de investigación, sin que pueda contarse con respuestas conclusivas hasta el momento.

282. No obstante lo anterior, el Estado ha hecho referencia al Batallón 35 y al Coronel Élfego José Lujan Ruíz, a lo largo de este procedimiento, en razón de que ambos han sido identificado como responsables de manera constante por la representación y sus testigos, sin que existan elementos que indiquen su involucramiento en los hechos de este caso.

283. Al respecto, el Estado resalta que, efectivamente, la función de esa Corte IDH no es determinar responsabilidades penales, y por otro lado, a la luz de los estándares de la responsabilidad estatal, no es posible atribuir los hechos de este caso al Estado mexicano.

c) La carga de la prueba recae en la Representación.

284. Durante la audiencia, la CIDH y la representación enfatizaron que la carga de la prueba recaía en el Estado por tratarse de una desaparición forzada. Al respecto, el Estado mexicano es consciente de que de acuerdo con el principio *onus probandi incumbit actori*, reiteradamente referido tanto por la Corte IDH, como por otros tribunales internacionales¹³, una de las reglas fundamentales de cualquier procedimiento internacional es que la parte que alega un determinado hecho que comprometa la responsabilidad internacional de un Estado tiene la carga de probar su aseveración.

285. No obstante, esa Corte IDH ha establecido una excepción a la regla en casos de desaparición de personas¹⁴, por medio de la cual la carga de la prueba se invierte si se cumplen los siguientes requisitos fehacientemente¹⁵:

- Un patrón sistemático de desapariciones ocurridas en las mismas condiciones, y,
- Que las personas desaparecidas fueran vistas por última vez en poder del Estado o exista certeza de que éste las toleró intencionadamente

¹³ Corte IDH. *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 129; Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 123; Corte IDH. *Caso Las Palmeras Vs. Colombia*. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C No. 90, párr. 41; *Case concerning Pulp Mills on the Uruguay River* (Argentina v. Uruguay). I.C.J. Judgment of 20 April 2010, párr. 162; *Maritime delimitation in the Black Sea* (Romania v. Ukraine). I.C.J. Judgment of 3 February 2009, párr. 68; *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 128, para. 204; *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 437, para. 101

¹⁴ Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 123.

¹⁵ Cheng, Bin. *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. págs. 306 y 307.

286. El primer requisito no se cumple por las siguientes razones:

- A diferencia de otros casos, como es el caso respecto del asunto *Radilla Pacheco y otros*, u otros asuntos relacionados con otros Estados partes, en donde se reflejan patrones claros que se desarrollaban por parte de agentes estatales, en el presente caso se sostiene que, contrariamente, las características y objetivos propios del Operativo Conjunto Chihuahua eran precisamente la protección de la población en general.
- El hecho de que existan quejas o denuncias sobre presuntas violaciones a derechos humanos a cargo de las fuerzas armadas de México, de ninguna manera se traduce en un contexto sistemático. Las cuestiones específicas que podrían traducirse en un contexto de este tipo para el presente caso no han sido presentadas ni por la CIDH ni por la Representación.
- Las conductas ilícitas perpetradas por elementos del Ejército han sido investigadas y sancionadas, lo cual es reflejo claro de la política de protección de derechos humanos por parte del Estado mexicano. Ello, por supuesto, en adición al conjunto de medidas que el Estado mexicano tomó y sigue tomando en la materia, a nivel de prevención.
- El Estado ha identificado un claro contexto en Chihuahua, durante la época de los hechos del presente caso, que indica la presencia del crimen organizado en la región, y la comisión de actividades ilícitas en contra de la población.
- El Estado ha presentado un contexto particular para los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2009, y que se relacionan con el asesinato de dos familiares de las personas desaparecidas, un año antes de su desaparición, presuntamente a cargo de miembros de la delincuencia organizada.
- No obstante el desahogo del cúmulo de actuaciones por parte de la institución del Ministerio Público no se ha documentado asunto diverso alguno desplegado con el mismo actuar del que nos ocupa, que conlleve a establecer la existencia de un patrón sistemático.

287. El segundo requisito no se configura por la siguientes razones:

- Las personas desaparecidas fueron vistas por última vez la noche del 29 de diciembre de 2009, quienes fueron privadas de la libertad por presuntos comandos armados que portaban uniformes tipo militar y armas largas.
- El hecho de que los grupos armados porten uniformes tipo militar o hayan mostrado actitudes semejantes a elementos castrenses, de ninguna forma se traduce *ipso facto* en una prueba contundente que permita atribuir la conducta a agentes estatales. Particularmente, a la luz del contexto del estado de Chihuahua, en el que miembros de la delincuencia organizaba hacían uso de prendas tipo militar, y en algunos grupos, éstos tenían como integrantes a desertores del Ejército.
- De frente al contexto que imperaba en Chihuahua durante los hechos del caso, el uso de vestimenta tipo militar no es suficiente para confirmar que los sujetos que detuvieron a las tres personas desaparecidas eran agentes estatales. Contrariamente, existen fuertes indicios del uso de este tipo de vestimenta por parte de grupos de la delincuencia organizada que se encontraban en la zona en la que se llevaron a cabo los hechos.
- Existen otros elementos específicos de este caso que sugieren la posible responsabilidad de grupos delictivos.
- Obra dentro del expediente del caso, la declaración de una vecina del lugar de donde ocurrió la desaparición de Nitza Paola y José Ángel, que refiere que los sujetos que pudieron observar su hijo y un amigo de éste vestían de civil.
- Con lo anterior, el Estado no controvierte o brinda una interpretación distinta al contenido de las declaraciones de los familiares de las personas desaparecidas. Contrariamente, se considera que es un elemento importante el hecho de que los anteriores testigos identifiquen que algunos de los individuos que detuvieron a sus familiares portaban vestimenta verde, y otros, vestimenta color arena.

- De esta manera, el hecho de que el grupo que llevó a cabo la detención estuviera integrado por individuos con dos colores distintos de vestimenta, e incluso que algunos pudieran estar vestidos de civiles, pone aún más en duda que se trate de elementos militares, quienes contaban con un tipo de vestimenta homologada.
- Al respecto, el uniforme utilizado por elementos del 35 Batallón al momento de la detención de las personas desaparecidas no corresponde con la variedad descrita por los testigos presenciales. Lo anterior se encuentra corroborado con las pruebas documentales que ha enviado el Estado a esa Corte, en las que se identifica que el uniforme que era utilizado oficialmente durante la fecha de la desaparición era de un solo de color verde.
- Por otro lado, el mismo día en que ocurrió la desaparición, un agente policial, quien fue notificado por un amigo de las personas desaparecidas, declaró que mientras realizaban acciones de búsqueda cerca de los lugares de los hechos, encontraron una fogata en donde estaban siendo quemados un radio, una pistola y un chaleco, las dos últimas con insignias oficiales de corporaciones de seguridad.
- Lo anterior, fue valorado por el propio Poder Judicial de la Federación en el presente caso.
- En las fechas de la desaparición no había elementos militares desplegados en el Ejido Benito Juárez.
- No se desprenden indicios que den pauta a una probable participación de agentes estatales de otra índole.
- No obra documental o testimonial alguna que afirme la presencia de las víctimas directas en el 35/o Batallón de Infantería, sino por el contrario.
- No existe dato probatorio que conduzca a establecer al menos indiciariamente que elementos del Estado hubieran propiciado o mantenido el ocultamiento de las víctimas

bajo alguna forma de detención (aquiescencia)

288. A la luz, no se cumplen los requisitos para hacer valer una excepción en la aplicación del principio *onus probandi incumbit actori*. Por lo tanto la carga de la prueba recae en la parte actora.

d) Investigaciones con perspectiva de género y responsabilidad por violaciones a la Convención Belém Do Pará.

289. La representación afirma durante sus alegatos y en las respuestas a las preguntas de los jueces que los supuestos elementos del Ejército iban detrás de Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, y que José Ángel Alvarado habría sido aprehendido por intentar defenderlas. Asimismo, refieren que el Estado mexicano no habría investigado bajo una perspectiva de género.

290. Respecto a la alegada violación a la Convención Belém Do Pará, el Estado resalta que la propia CIDH concluyó en su informe de fondo que no existen elementos para concluir dicha violación. Sin embargo, la Representación incluyó una frase en el ESAP en donde indica que el Estado mexicano violó el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, pero sin hacer mención de alguna prueba, hecho o argumento que haga valer su dicho.

291. En este sentido, el Estado considera que a la luz de los artículos 34 y 37 del Reglamento de esta Corte, la etapa del procedimiento oportuna para presentar argumentos sobre las presuntas violaciones a derechos humanos, son el primer escrito presentado por la Comisión IDH y el ESAP de la Representación. Por lo que se considera que esta Honorable Corte no debe pronunciarse en torno a las supuestas violaciones a la Convención Belém Do Pará.

292. Asimismo, respecto de las investigaciones llevadas a cabo por el Estado mexicano, éste sostiene que la investigación con perspectiva de género se refiere a un estándar de derecho internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, que se traduce en que la investigación tenga alcances adicionales cuando la víctima de un ilícito es una mujer que sufre

muerte, desaparición, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres.

293. Por ello, como fue anteriormente referenciado en el presente escrito, para la investigación de delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres la PGR cuenta la FEVIMTRA, la cual dentro de su normativa dispone que las investigaciones ministeriales que incorporan la perspectiva de género deben tener en cuenta, para la elaboración de la teoría del caso, que la violencia dirigida contra las mujeres es ejercida de manera mayoritaria por hombres formados en una sociedad que permite la discriminación de las mujeres por el hecho de serlo, entendiéndose que esta violencia es una consecuencia de violaciones estructurales a los derechos de las niñas y las mujeres. Paralelamente, no debe perderse de vista el análisis interseccional, que considera que las víctimas proceden de variados contextos, entornos y orígenes, lo cual implica reconocer los factores que, además de las razones de género, afectan la vigencia de los derechos humanos (tanto de hombres como de mujeres), como la situación económica, la salud, las creencias, la pertenencia a grupos minoritarios, personas en reclusión, orientación sexual, la edad, entre otros componentes.

294. Como ha sido expuesto por el Estado, la investigación de los hechos del caso se encontró a cargo de la FEVIMTRA del 8 de marzo 2010 al 30 de septiembre de 2011, tiempo en el que se valoraron entre otros elementos, los rasgos de violencia de género con que los presuntos agresores hubiesen motivaron la ejecución del ilícito, la consideración de aquellos motivos que podrían estar asociados a la manifestación de la violencia y que se encuentran en el entorno social que influyen en el comportamiento del agresor y de las víctimas, si existieron situaciones de poder que por cuestiones de género dieran cuenta de un desequilibrio entre las partes y su hubo situaciones de desventaja provocadas por condiciones de su sexo o género.

295. Una vez agotados los análisis jurídicos correspondientes y realizado múltiples diligencias, la investigación de los hechos, al no desprender elementos que dieran cuenta de un delito cometido en contra de las personas desaparecidas por razón de su sexo o género, fue declinada a la Delegación de la PGR en el estado de Chihuahua.

296. Por lo tanto, el Estado mexicano afirma que las investigaciones se desarrollaron con perspectiva de género y se concluyó que no existían componentes adicionales que indicaran o guiaran las actuaciones para que la desaparición se hubiese llevado a cabo por cuestiones o razones de género.

e) Ley de Seguridad Interior.

297. El Estado mexicano enfatiza que esa Corte IDH no tiene competencia para pronunciarse sobre la implementación de la Ley de Seguridad Interior en virtud de que dicho ordenamiento jurídico no se encontraba vigente al momento de los hechos y no fue aplicado a los mismos.

298. Al respecto, en el caso *Tarazona Arrieta y otras vs. Perú*, la Representación argumentó que el Estado no contaba con legislación respecto del uso de la fuerza al momento en que ocurrieron los hechos, además de que el marco vigente en ese momento no era compatible con la CADH.¹⁶ Por su lado, la Corte IDH concluyó respecto del marco vigente, que no era pertinente pronunciarse, **ya que éste no fue aplicado al momento de los hechos**¹⁷.

299. De manera similar, en el presente caso, esa Corte IDH se encuentra limitada para analizar o pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior, en tanto ésta no estaba vigente ni fue aplicada a los hechos de este caso. En efecto, dicho ordenamiento no fue analizado durante el procedimiento seguido ante la Corte IDH, con lo cual, en todo caso el Estado no tuvo oportunidad de presentar sus argumentos de manera oportuna, tanto de admisibilidad como de fondo.

300. De hecho, se resalta que aún no han sido agotados los recursos internos respecto de la constitucionalidad y convencionalidad de dicho ordenamiento, estando pendiente de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso, estando disponible el juicio de

¹⁶ Corte IDH. *Caso Tarazona Arrieta y Otros vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286, Párr 151.

¹⁷ *Ibidem*. Párrs.167, 168 y 187.

amparo para la población en general.

301. En seguimiento al análisis que está llevando a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República ha pronunciado públicamente que no se emitirá ninguna declaratoria de conformidad con la Ley de Seguridad, hasta en tanto el máximo tribunal mexicano se pronuncie sobre su constitucionalidad.

302. Por lo tanto, esa Corte IDH se encuentra limitada para pronunciarse en torno a la Ley de Seguridad Interior.

303. No obstante, el Estado mexicano destaca las siguientes generalidades sobre dicho ordenamiento jurídico:

- La Ley de Seguridad Interior derivó de una iniciativa de Ley presentada por diversos diputados ante la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2016.
- De conformidad con el procedimiento legislativo previsto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores realizaron el análisis y discusión respectivos, tomando en cuenta las observaciones de varias organizaciones de la sociedad civil.
- La Ley fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2017.
- De conformidad con el artículo 1° de la Constitución mexicana, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación general de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, obligación que se ve reflejada en el artículo 7 de la propia Ley al disponer que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

- Para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se debe seguir el siguiente procedimiento:
 - ✓ En primer lugar, el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y (i) comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, o (ii) se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional.
 - ✓ El Presidente, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las 72 horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos y gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.
 - ✓ La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, misma que no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. En caso de prorrogarse, el deber de fundamentación, motivación y publicidad operará nuevamente.
 - ✓ La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior.
 - ✓ El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por

conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

- ✓ El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
- Asimismo, la Ley de Seguridad Interior, en su artículo 18, establece con toda puntualidad que, en ningún caso, las acciones de seguridad interior que llevan a cabo las autoridades federales tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
- Además, el artículo 20 de la Ley, establece que la intervención de las Fuerzas Federales será de manera subsidiaria es decir, que sólo intervendrán mediante una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior cuando las capacidades locales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.

304. Asimismo, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios jurisprudenciales en donde determinó que la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tareas de seguridad pública es constitucional:

- ✓ Tesis 34/2000 Ejército, Fuerza Aérea y Armada. “La determinación de cuáles son sus funciones exige el estudio sistemático de la Constitución y, por lo mismo, la comprensión de las garantías individuales y de la seguridad pública, conforme al régimen jurídico vigente.”
- ✓ Tesis 35/2000 Seguridad Pública. “Su realización presupone el respeto al derecho y en especial de las garantías individuales.”
- ✓ Tesis 36/2000 Ejército, Fuerza Aérea y Armada. “Si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento a la Constitución y a

las leyes.”

- ✓ Tesis 37/2000 Ejército, Fuerza Aérea y Armada. “Pueden actuar acatando órdenes del Presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin llegar a situaciones que requieran la suspensión de aquellas, hagan temer, fundadamente, que de no enfrentarse de inmediato sería inminente caer en condiciones graves que obligarían a decretarla.”
- ✓ Tesis 38/2000 Ejército, Fuerza Aérea y Armada. “Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del Artículo 129 de la Constitución).”
- ✓ Tesis 39/2000 Seguridad Pública. “La participación de los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no viola el Artículo 21 Constitucional”.

305. Por lo tanto, se estima que las alegadas violaciones al artículo 2 de la CADH deben ser desestimadas por esa Corte IDH por carecer de competencia para conocer sobre la Ley de Seguridad Interior.

F. Observaciones a la línea argumentativa de la Comisión.

306. En la presente sección, el Estado mexicano hará algunas observaciones sobre los pronunciamientos vertidos por la CIDH en su intervención oral durante la audiencia pública del presente caso.

307. De manera particular, el Estado mexicano hará observaciones atinentes a la argumentación sobre los elementos para acreditar una desaparición forzada.

a) Contexto de desaparición forzada.

308. El Estado mexicano observa que dentro de la argumentación esgrimida por la CIDH para acreditar los elementos de una desaparición forzada, se menciona la existencia de un contexto

de desaparición forzada en el estado de Chihuahua.

309. En primer lugar, el Estado considera que la CIDH no ha aportado elementos para comprobar dicho contexto. Al respecto, el Estado mexicano reitera su posición y argumentos previamente desahogados.

310. Adicionalmente, el Estado mexicano destaca que, en cualquiera de los casos, un contexto de este tipo no sería un elemento suficiente para acreditar una desaparición forzada en el presente caso.

311. En efecto, la Corte IDH ha establecido que *la sola comprobación de la práctica de desaparición no basta, en ausencia de toda otra prueba, aun circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella*¹⁸.

312. En el presente caso, únicamente existen testimonios vertidos por los testigos presenciales que refieren la presencia de sujetos que portaban vestimenta tipo militar durante la desaparición de sus seres queridos. No obstante, ello no es suficiente para establecer la identidad militar de dichos sujetos, de frente al contexto y demás pruebas presentadas por el Estado.

313. De manera complementaria, el Estado se permite informar que, por lo que respecta a las quejas y recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la presente administración se han presentado 3011 quejas ante la CNDH por actos presuntamente violatorios de derechos humanos atribuibles a personal militar, de las cuales han sido concluidas sin responsabilidad 2645 y únicamente 15 han concluido en recomendación, lo cual representa el 0.49 % del total de las quejas.

314. Asimismo, del 2006 al 2012 se recibieron un total de 113 recomendaciones de la CNDH. En lo que va de la presente administración se han recibido 15 recomendaciones de la CNDH.

¹⁸ Corte IDH. *Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240; Corte IDH. *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, Párrafo 157

Lo anterior refleja una reducción del 86.72%.

315. Asimismo, como medidas de prevención de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, el Estado ha implementado, entre otras acciones, las siguientes en materia de capacitación:

- **En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018**, se establece la meta “Lograr un México en paz”, la cual tiene por objeto transformar en acciones reales la reforma constitucional de derechos humanos, que obliga a todas las autoridades a promover respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Al respecto, la SEDENA ha implementado los siguientes programas
- **Programa sectorial de defensa nacional 2013-2018**, que tiene en sus directivas: garantizar los derechos humanos, así como el fortalecimiento de las capacidades para ampliar las oportunidades de las mujeres y los hombres del ejército y Fuerzas Armadas Mexicanas.
- **Programa de derechos humanos SEDENA 2014 – 2018**, el cual tiene como fin prevenir violaciones a los derechos humanos, garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales, así como fortalecer la protección y respeto de los mismos.
- **Capacitación impartida en el Sistema Educativo Militar:** Se imparten en todos los planteles las materias de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como parte de la formación para su encuadramiento en los diferentes organismos del Ejército y Fuerza Área.

316. Algunas de las capacitaciones desarrolladas son:

- Diplomado “Los Derechos Humanos y Las Fuerzas Armadas”.
- Curso/Taller de investigación y documentación forense para la aplicación del Protocolo de Estambul: Dirigido a médicos, odontólogos, abogados y psicólogos.
- Curso de formación de profesores en derechos humanos.
- Seminario de Derechos Humanos: Dirigido al personal que cursó el curso anterior.

- Seminario para la igualdad entre mujeres y hombres.

317. La capacitación en el sistema de adiestramiento militar cubre la instrucción básica y continúa del personal militar para el cumplimiento de las misiones del ejército y fuerza aérea mexicanos. Algunas de las acciones que cubre son:

- ✓ En coordinación con la CNDH se proyectan videoconferencias en tiempo real a las 12 regiones militares, asistiendo a la fecha 980,209 elementos.
- ✓ Respecto a la materia de derechos humanos en adiestramiento, en las fases básicas se han capacitado 28,721 elementos, especializada 92,729 elementos y de corporación 110,303 elementos.
- **“Curso para difundir la directiva que regula el uso legítimo de la fuerza y del manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas”**, impartido por personal especialista.
- Capacitación intensiva especializada en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, manual del uso de la fuerza y hostigamiento y acoso sexual, dirigido al personal de las unidades que concluyen la 3/a. fase de adiestramiento en los centros de adiestramiento regional (c.a.r.),. habiéndose capacitado a 156 unidades con los resultados siguientes: 596 jefes; 3,555 oficiales; 59,357 tropa, obteniendo un total de 63,689 efectivos capacitados
- **Respecto de capacitación en el extranjero**, se encuentran las siguientes:
 - ✓ Washington, D.C. EUA: Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.
 - ✓ San Remo, Italia: Curso Militar sobre Derechos Internacional Humanitario; Curso Militar de Derechos de los Conflictos Armados y Curso Avanzado sobre Derecho Internacional Humanitario.
 - ✓ Lima, Perú: Curso Superior para Oficiales en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.
 - ✓ San José, Costa Rica: Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.

- ✓ Santo Domingo, República Dominicana: Especialidad en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.

318. Respecto a Convenios con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos:

- El 21 de febrero de 2013, se firmó un convenio de colaboración con el **Comité Internacional de la Cruz Roja**, con el objeto de impulsar la integración y promoción del derecho internacional humanitario y de las normas en materia de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza en el ámbito de sus facultades.
- El 10 de abril de 2013, se firmó el convenio general de colaboración con la **CNDH**, con el objeto de establecer las bases de colaboración y apoyo entre ambas partes en aquellos proyectos y programas de trabajo, relacionados con la promoción y formación en materia de derechos humanos.
- El 6 de junio de 2013, se firmó el convenio general de colaboración con el **Instituto Nacional de Lenguas Indígenas**, con el objeto de establecer el marco general que permite llevar a cabo programas y acciones para sensibilizar, capacitar y certificar al personal militar que domine una lengua indígena, como traductores o intérpretes.
- El 13 de diciembre de 2013, se firmó el convenio general de colaboración entre el **Instituto Nacional de las Mujeres**, con el objeto de desarrollar y realizar acciones para la institucionalización de la perspectiva de género.
- El 28 de mayo de 2015, se firmó un convenio de colaboración con la **Universidad Nacional Autónoma de México**, para materializar el curso de alto nivel en derechos humanos, para servidores públicos de la SEDENA, a fin profesionalizar desde los mandos medios hasta los mandos superiores en materia de derechos humanos.
- El 17 de octubre de 2015, se firmó un convenio de colaboración con la **Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas**, con el objeto de establecer las bases para realizar, en el ámbito de las respectivas competencias, acciones conjuntas para fortalecer la coordinación interinstitucional en la atención a víctimas del delito y de violaciones a

derechos humanos.

- El 14 de diciembre 2015, se firmó un convenio de colaboración con el **Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación**, con el objeto de conjugar sus esfuerzos para la atención, respeto, promoción, investigación académica y capacitación en materia del derecho a la no discriminación.
- El 2 de septiembre de 2016, se firmó el convenio específico de colaboración **con la CNDH** para la edición del manual un manual en materia de derechos humanos. Se llevará a cabo una primera edición de 10,000 ejemplares, con lenguaje incluyente, apegado a las reformas constitucionales en derechos humanos, igualdad de género y el sistema penal acusatorio.
- El 25 de enero de 2017, se suscribió un acuerdo de colaboración entre el **Instituto Interamericano de Derechos Humanos** y la SEDENA.

b) Testimonios de familiares.

319. La CIDH afirma que los testimonios de 4 familiares y funcionarios públicos que asistieron a los familiares serían pruebas que acreditarían una desaparición forzada en el presente caso.

320. Al respecto, el Estado mexicano recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, [...] *es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos*¹⁹. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre desaparición forzada, ya que esta forma de violación se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar la

¹⁹ Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo*. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr.129, y *Caso Galindo Cárdenas y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 02 de octubre de 2015. Serie C No. 301, párr. 7.

detención, el paradero y la suerte de las víctimas²⁰.

321. Por ejemplo, en el caso *Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*, la Corte IDH determinó que *si bien el Gobierno de Honduras incurrió en numerosas contradicciones, [...] no es suficiente, [...], para configurar una presunción judicial que atribuya responsabilidad a Honduras por las desapariciones mencionadas*²¹.

322. En el presente caso, de frente a los testimonios de los familiares, el Estado mexicano sostiene que de éstos únicamente es posible extraer que los individuos que desaparecieron a sus seres queridos portaban vestimenta tipo militar; de lo cual no es posible concluir que dichos individuos eran efectivamente agentes estatales.

323. Asimismo, respecto de los funcionarios públicos que tuvieron contacto con los familiares de las personas desaparecidas, el Estado ha aportado evidencia para demostrar lo siguiente:

- Las declaraciones de los funcionarios estatales son consistentes en negar que hubieran informado a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos.
- Las mismas declaraciones son consistentes en señalar que jamás les constó que la detención hubiera sido llevada a cabo por agentes estatales o el paradero de las personas desaparecidas. Además de que del acervo probatorio con el que se cuenta sobre el caso, no existen elementos objetivos que indiquen que dichos funcionarios pudieran conocer el paradero de las personas desaparecidas.
- Contrario a ello, los funcionarios que han sido identificados por la CIDH en su informe de fondo señalan que debido a que la denuncia de los hechos se llevó a cabo afirmando

²⁰ Cfr. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo*. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 131, y *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 21.

²¹ Corte IDH. *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo*. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, Párrafo 159.

que los individuos que llevaron a cabo la detención eran militares (en razón del tipo de vestimenta que utilizaban), éstos expresaron que “en su caso” sus familiares podrían encontrarse en el 35 Batallón o que preguntaran en dichas instalaciones.

- Lo anterior se encuentra corroborado por las declaraciones que obran en el marco de la averiguación previa del caso, además de las declaraciones que han sido desahogadas de manera escrita ante esta Corte.

324. De esta manera, se sostiene que el análisis probatorio no arrojaría indicios, presunciones o circunstancias objetivas que determinen la participación del Estado mexicano en la desaparición sobre la cual versa el presente caso.

G. Respuestas y observaciones sobre las preguntas formuladas por los jueces durante la audiencia pública.

a) Respuesta a la pregunta realizada por Su Excelencia, el Juez Patricio Pazmiño Freire.

i. Aseguramiento de uniformes en el Ejido de Benito Juárez.

325. Durante la audiencia pública el Juez Pazmiño Freire solicitó al Estado Indicar el número de aseguramientos de uniformes apócrifos en el Ejido de Buenaventura.

326. Para ello, se recuerda que en el período que comprende del 1 diciembre 2006 al 12 de octubre de 2017, en el estado se han asegurado 1,734 piezas de uniformes y aditamentos de uso oficial, destacando uniformes especiales (561), Chalecos Antibalas (424), fornituras (227), cascos (151), gorras oficiales (128), chalecos tácticos (113), portacargadores (77), pistoleras para fornitura (27), insignias (13), camisetas oficiales (11) y pecheras (2)²².

327. En el mismo período, fueron puestas a disposición 386 personas vinculadas con eventos

²² Cifras del Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia. Fuente: Procuraduría General de la República.

en los que se aseguraron uniformes y aditamentos de uso oficial. Cabe hacer mención que a 147 personas se les puso a disposición con chalecos antibalas, 77 personas con uniformes especiales, 53 personas con fornituras, 48 con chalecos tácticos, 17 con cascos, 16 con porta cargadores, 11 con pistoleras para fornituras, 8 con camisetas oficiales, 5 con insignias oficiales, 3 con gorras oficiales y 1 con pecheras.

328. Los municipios con el mayor número de personas puestas a disposición en la entidad por eventos vinculados con el aseguramiento de uniformes y aditamentos de uso oficial son: Juárez (179), Chihuahua (42), Ascensión (22), Hidalgo del Parral (21), Valle de Zaragoza (15), Cuauhtémoc (11), Madera (10), Jiménez (9) y Guadalupe (8).

329. En el caso del municipio de Buenaventura, se reporta la puesta a disposición de una persona que incurrió en la comisión de este ilícito²³, lo cual incluye el aseguramiento de 4 uniformes, 2 gorras, 2 equipos de comunicación y cartuchos calibre 38; lo cual confirma que también en este municipio se ha actualizado el mismo contexto general.

330. En este sentido, el Estado mexicano destaca a esa Corte IDH que el aseguramiento de uniformes refleja el *modus operandi* de la delincuencia organizada en la época y lugar de los hechos.

331. Asimismo, se debe considerar que el hecho de que únicamente se tenga un aseguramiento en Buenaventura de ninguna forma debe ser interpretado como poca presencia de la delincuencia organizada en la zona. De hecho, tal aseveración sería tan subjetiva como afirmar que en el presente caso no se podría configurarse una desaparición forzada en virtud de que no se ha registrado ninguna en Buenaventura hasta la fecha.

332. Particularmente, se reiteran los siguientes puntos ya mencionados anteriormente:

²³ En el gráfico, se observa que el mayor número de personas puestas a disposición corresponde a los años 2008, 2009 y 2010, en ese orden. En los años subsecuentes, las cifras disminuyen significativamente.

- El estudio de una región es mucho más relevante que una delimitación territorial/política en particular; y, para este caso, en la región en donde se llevaron a cabo los hechos es claro el uso de vestimenta tipo militar por parte del crimen organizado.
- Negar la existencia de este contexto para el municipio de Buenaventura, argumentando que no han existido numerosos decomisos en ese municipio en particular, implicaría que una delimitación política tiene más relevancia que el estudio de una región en particular, no importando que la delimitación entre un municipio y otro sea de pocos o muchos metros. Ello, resultaría ser un análisis sumamente subjetivo y poco serio.
- Asimismo, no debería aplicarse al Estado mexicano un estándar así de riguroso, que no se ha sido seguido en las sentencias de esa Corte. De ser el caso, siguiendo la misma lógica, se resalta que ni la CIDH ni la representación han comprobado que en el Municipio de Buenaventura se hubieran presentado una sola desaparición forzada por parte del Ejército durante los hechos del caso.

333. En este sentido, los aseguramientos deben ser analizados en conjunto con la información restante sobre el contexto de la delincuencia organizada en Chihuahua, y realizando un análisis de la región en cuestión.

ii. Análisis de riesgo y medidas de seguridad.

334. En relación con el cuestionamiento formulado al Estado mexicano, en torno al análisis de riesgo practicado a los beneficiarios de medidas provisionales, el Estado mexicano informa que el 8 y 9 de marzo de 2018 se realizó un análisis de riesgo colectivo donde se valoró la posible situación de riesgo de todas las personas pertenecientes a los tres núcleos familiares de las personas desaparecidas, exceptuando aquellas que al momento de la entrevista no se encontraban radicando en el país. En dicho análisis se concluyó lo siguiente:

- La situación de violencia que se presenta actualmente en el país obliga al Estado a tomar medidas preventivas que permitan evitar, disuadir o disminuir la posibilidad de

consumación de un hecho en contra de la seguridad de los beneficiarios, aunado a que es posible observar que debido a las acciones de exigencia de justicia por la desaparición de sus familiares las colocó en riesgo, sin que se identifique que a la fecha dicho riesgo continúa.

- En cuanto al análisis de las amenazas, de la información acopiada en el trabajo de campo y en la búsqueda de fuentes abiertas y cerradas, fue posible identificar la existencia de dos eventos de este tipo: 1) la llamada que recibió el señor José Ángel Alvarado Favela el 29 de enero de 2011, donde le dijeron *“nosotros tenemos a tu hijo y está vivo, te vamos a matar como un perro a ti y a tus hijos, tienes 12 horas para dejar la casa y la ciudad, si no los matamos a todos porque están hablando demasiado”*; y 2) el mensaje que encontró la esposa de Jaime después de haber sido allanado el domicilio en Ciudad Juárez el 28 de agosto de 2011, el cual decía: *“porque te quisimos quebrar y no se pudo pero ya te tenemos culero y te va a cargar la verga a ti y a tu pinche familia atte ya sabes quién’*.
- Respecto al análisis de las agresiones, de la información recabada en el trabajo de campo y en la búsqueda de fuentes abiertas y cerradas *fue posible identificar la existencia de dos de éstas, el evento donde personas a bordo de una camioneta tipo ministerial golpean con la puerta a Jaime y el allanamiento al domicilio de Jaime en Ciudad Juárez.*
- Respecto al homicidio de Fabián, es importante reiterar que, dicho análisis de riesgo no considera que éste haya sido como consecuencia de la exigencia de justicia por la desaparición de Nitza, Rocío y José Ángel, pues además de que Fabián no tenía el mismo grado de visibilidad que Jaime o el señor José Ángel ante las autoridades, se identificó por la información aportada por los familiares, que la instalación de cámaras en el domicilio generó que los vecinos pensaran que se trataba de una familia adinerada por lo que podrían pertenecer a un grupo delictivo. No obstante, se pone de relieve que debido a una negligencia en la cadena de custodia de un video del suceso que se proporcionó a la policía municipal, se dio una filtración de sus rostros, las cuales fueron

viralizadas en los medios de comunicación locales, situación que –a decir de los beneficiarios- los colocó en una situación de riesgo mayor y los orilló a salir de Ciudad Juárez y resguardarse en Chihuahua.

- Del análisis de los incidentes de riesgo, de la información acopiada en el trabajo de campo y en la búsqueda de fuentes abiertas y cerradas *fue posible identificar la existencia de cuatro de éstos, tratándose de los hostigamientos sufridos después de interponer la denuncia por la desaparición de sus familiares donde señalaron que posibles miembros del Ejército rondaban sus domicilios; que personas a bordo de una camioneta, con placas parecidas a las de la policía, permanecieron fuera del antiguo domicilio de José Ángel Alvarado Herrera; que en los retenes únicamente por su apellido los trataran de una forma “inusual”; y que en el funeral de Fabián en el Ejido Benito Juárez acudieran policías municipales a la funeraria a preguntar por ellos.*
- Respecto al nivel de identificación del actor con intención de causar daño a dicho de las personas evaluadas, y de la información obtenida durante la elaboración de la presente evaluación de riesgo de elementos de la policía municipal, estatal y ministerial del Estado de Chihuahua, además de algún grupo delictivo de la zona, sin contar con los elementos para poder especificar el Cártel al cual pertenezcan.
- Por lo que hace al nivel de interés del presunto actor en las personas evaluadas, se considera que sería bajo esto por las manifestaciones de amenazas, agresiones e incidentes de riesgo que analiza la presente evaluación.
- Se valora que la labor que realizan las personas evaluadas no afecta, de manera directa, intereses de dichos sujetos, pues más bien, el posicionamiento de exigencia recae sobre las autoridades federales encargadas de procuración de justicia, además sobre miembros castrenses, quienes no han sido identificados como agresores en los eventos de riesgo que señalaron los beneficiarios, únicamente durante los incidentes registrados en el año

2011, sin que actualmente se tenga registro alguno de eventos perpetrados por los mismos.

335. En razón de lo anterior, el Mecanismo propuso a esta Unidad la implementación de una serie de medidas de protección en favor de los familiares evaluados:

- Números de contacto de emergencia a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para los núcleos familiares.
- Continuar con las medidas de infraestructura instaladas en el domicilio del señor José Ángel Alvarado Favela consistentes en: Instalación y puesta de cerradura de alta seguridad para puerta (protección contra perforación con broca), Instalación y puesta en operación de (3) luminaria suburbana ahorradora, Instalación de metro lineal de malla ciclónica, Instalación de metro lineal de concertina
- Instalar medidas de infraestructura como: cerraduras de alta seguridad, malla y concertina en los domicilios de Patricia y Obdulia en el Ejido Benito Juárez, evitando generarles una mayor exposición, únicamente reforzando las medidas con las que cuentan los inmuebles.
- Se brinde atención integral a los todos los familiares.
- Continúe con el refugio de seguridad en Chihuahua para Jaime Alvarado y su familia, proporcionando alimentos, e insumos de limpieza, en tanto sea su deseo el retorno a Ciudad Juárez.

336. Asimismo se propuso la conclusión de las medidas de infraestructura en los domicilios de Ciudad Juárez, pues actualmente no son habitados y la implementación de cámaras generó situaciones de riesgo, según las manifestaciones de los beneficiarios respecto a que la que la instalación de cámaras en el domicilio generó que los vecinos pensaran que se trataba de una familia adinerada por lo que podrían pertenecer a un grupo delictivo.

337. Ahora bien, además de las medidas que ya se han otorgado a los miembros de los tres núcleos familiares residentes en el país, se pone de relieve que después de la celebración de la audiencia en esa Corte IDH, el Estado mexicano –por medio de la Secretaría de Gobernación– entabló comunicación directa con la beneficiaria Rosa Alvarado con la finalidad de acordar una reunión para determinar las medidas urgentes de atención para implementarse a la brevedad posible y mantenerla en salvaguarda. Dicha reunión se agendó para el viernes 18 de mayo del 2018 en las instalaciones de la Fiscalía Zona Norte de la Fiscalía General del estado ubicadas en Ciudad Juárez.

338. En dicha reunión participaron además de la señora Rosa Alvarado y su núcleo familiar, las licenciadas Gabriela Romero y Patricia Galarza, funcionarias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua (CEAVE). Derivado de esta reunión se acordó el traslado inmediato de la señora Rosa Alvarado y su núcleo familiar, consistente de 6 personas. Dicho traslado tuvo como finalidad el de ser ubicadas en un refugio de seguridad otorgado por esta Secretaría desde fecha 20 de mayo del presente año. Esta medida tendrá una vigencia de 6 meses, una vez cumplidos se revalorará la situación de los beneficiarios y se tomarán las acciones conducentes.

339. Aunado a lo anterior, la CEAVE acordó que una vez que la familia se estableciera en la ciudad de Chihuahua, se iniciarían de manera inmediata los trámites de inscripción de la familia en el registro estatal de víctimas, que facilitaría la determinación de la CEAVE para otorgar las medidas de asistencia en su favor, además se entregaría una despensa provisional en favor de los beneficiarios.

340. El 27 de mayo de 2018 se instaló una medida de seguridad a favor de María Alvarado y su núcleo familiar, dicha medida consiste en servicio de hospedaje con alimentos y seguirá siendo implementada en tanto se pueda trasladar al núcleo familiar a un refugio de seguridad, esta medida también tendrá una vigencia de 6 meses, una vez cumplidos se revalorará la situación de los beneficiarios y se tomarán las acciones conducentes.

341. Al margen de lo anterior, se destaca que estas medidas de seguridad han sido consensuadas con los beneficiarios y sus representantes, con quienes además se pretende realizar una reunión de trabajo con la finalidad de generar acciones en materia de asistencia social.

342. Por último, se informa que aún y cuando el análisis de riesgo realizado por el Mecanismo determinó que no existen incidentes de riesgo recientes que tengan una relación con el origen de las medidas o que hayan sido perpetrados por elementos castrenses, el Estado mexicano toma en cuenta las circunstancias en las que se encuentran los núcleos familiares de Rosa, Jaime y María, todos Alvarado. Motivo por el cual se han realizado todos los esfuerzos institucionales suficientes para otorgarles medidas de seguridad que puedan garantizar su vida e integridad.

iii. Ley de Seguridad Interior.

1. Con respecto al cuestionamiento sobre si las autoridades militares tienen o conservan funciones de policía judicial, el Estado mexicano reitera que esa Corte IDH no tiene competencia para pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior en tanto ésta no se encontraba en vigor al momento de los hechos.

2. No obstante lo anterior, en respuesta al cuestionamiento formulado por el Honorable Juez Pazmiño de esa Corte, el Estado mexicano refiere que el artículo 18 de la citada ley establece con toda puntualidad que, **en ningún caso, las acciones de seguridad interior** que llevan a cabo las autoridades federales **tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno** en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

3. Asimismo, el artículo 20 de la Ley, establece que **la intervención de las Fuerzas Federales será de manera subsidiaria** es decir, que **sólo intervendrán** mediante una **Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior** cuando las capacidades locales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.

iv. Informes periódicos ante instancias internacionales en materia de

desaparición forzada.

4. En atención a la solicitud de su Señora Pazmiño, atinente a presentar los informes que el Estado mexicano ha presentado ante instancias internacionales competentes para investigar la desaparición forzada, en anexo al presente se remiten los siguientes informes que México ha remitido hasta el momento ante el Comité de Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

- Informe presentado referente a 2014 (Anexo 1)
- Informe presentado referente a 2015 (Anexo 2)
- Informe presentado referente a 2016 (Anexo 3)
- Informe presentado referente a 2018. (Anexo 4)

v. Supuesta llamada de Nitza Paola Alvarado Espinoza.

5. Por lo que respecta a la supuesta llamada realizada por Nitza Paola Alvarado Espinoza el 3 de febrero de 2010, el Estado mexicano advierte que la representación y la CIDH afirman que el Estado no investigó adecuadamente dicho suceso y que las razones vertidas para concluir la misma se basan en presunciones.

6. Sobre ello, el Estado mexicano reitera que llevó a cabo las investigaciones necesarias respecto del incidente reportado. Al respecto, y a reserva de que esta información se contiene en el anexo 121 de la respuesta del Estado, se destacan las siguientes diligencias:

- El 3 de febrero de 2010, la señora Juana Bustamante habría recibido una llamada del número [REDACTED], en la cual respondió una voz femenina quien se habría identificado como Nitza Paola Alvarado Espinoza.
- La CIDH y la representación señalan que existió una demora en la investigación de estos hechos y que no se determinó la posición satelital de la llamada oportunamente. Al respecto, se pone de relieve que los hechos fueron denunciados el 13 de febrero de 2010 ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua

(FGE) en Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 días después de que la llamada ocurrió.

- Las autoridades federales tuvieron conocimiento hasta el 31 de marzo de 2010, al haberse recibido copia del expediente 04/10 iniciado por la SEGOB. Después de 56 días de realizada dicha llamada, se efectuaron diversas diligencias en torno a la misma, entre ellas:
- Se ordenó la investigación de los números de las compañías telefónicas, siendo éstos los siguientes: [REDACTED]
[REDACTED]
- Se solicitó al CENAPI que fuera elaborada una red telefónica de las llamadas originadas de los números [REDACTED], con base en los registros que fueron enviados por las empresas concesionarias del servicio.
- Se obtuvieron dos registros de coordenadas y dos redes telefónicas, mismas que son concordantes con la Red telefónica, análisis y clasificación de información de los números telefónicos [REDACTED] proveniente de CENAPI.
- El número [REDACTED] se encuentra relacionado con extorsiones y las coordenadas son cercanas al CERESO Santa. Martha Acatitla (información coincidente con lo informado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia (CCSPJ) del Distrito Federal).

✓ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]

7. Del material probatorio, y particularmente, de acuerdo con la información plasmada a

las redes telefónicas se pudo establecer que dicha llamada fue realizada con cercanía a un centro penitenciario femenil en la Ciudad de México, y cuyo número telefónico se vinculó efectivamente con denuncias de “extorsiones”. Ante lo cual, el Estado sostiene que investigó debidamente dicho incidente.

8. El vínculo del número telefónico con actos de extorsión se respalda con la información proporcionada por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia del Distrito Federal, quien actúa como órgano de consulta, análisis y participación ciudadana en materia de seguridad pública, procuración de justicia, cultura cívica, atención a víctimas del delito y prevención y readaptación social. Dicha información contiene reportes en donde se vincula el número que se investiga con actos de hostigamiento en el marco del programa “No más extorsiones telefónicas”, impulsado por dicha organización.

9. Al margen de lo anterior, se destaca que las investigaciones incluyeron análisis periciales e investigaciones exhaustivas que derivaron en la determinación de sostener que el número ha sido utilizado en llamadas de extorsión.

10. Por lo tanto, el Estado mexicano afirma que se investigaron diligentemente los hechos una vez que fueron denunciados. Asimismo, se pudo establecer que el número telefónico [REDACTED] corresponde a un número relacionado con “extorsiones”, siendo ésta una afirmación conclusiva.

vi. Código de Justicia Militar.

11. En el presente caso se alega la responsabilidad del Estado por la desaparición de tres personas y por el conocimiento que tuvo de los hechos el fuero militar.

12. Respecto del primer punto, el Estado sostiene que la desaparición alegada en el presente caso no es atribuible a agentes estatales. Sobre el segundo punto, el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional ya que las investigaciones en el presente caso fueron atraídas en cierto momento por la jurisdicción militar, con lo cual se contravinieron los artículos 8 y 25 de

la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 2 del mismo instrumento, en razón de que la legislación de ese entonces permitía el conocimiento de los hechos por parte del fuero militar.

13. Al respecto, en el caso *Tarazona Arrieta y otras vs. Perú*, la Representación argumentó que el Estado no contaba con legislación respecto del uso de la fuerza al momento en que ocurrieron los hechos, además de que el marco vigente en ese momento no era compatible con la CADH. Por su lado, esa Honorable Corte concluyó que efectivamente al momento de los hechos, el Estado del Perú no contaba con un marco jurídico respecto del uso de la fuerza; sin embargo, no ordenó una medida de reparación, ya que el Estado había llevado a cabo diversas modificaciones legislativas.

14. En el presente caso, respecto al conocimiento que tuvo el fuero militar por los hechos del presente caso, debido a que en ese momento, así lo permitía la legislación mexicana, se resalta que con la reforma al Código de Justicia Militar, realizada en el año 2014, hoy en día está garantizado que en las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por personal de las fuerzas armadas sean investigadas en el fuero civil. Asimismo, actualmente la investigación del presente caso se encuentra en el fuero civil, en el área especializada de la PGR en materia de desapariciones.

15. En este sentido, el Estado mexicano considera que ya ha atendido la incompatibilidad que en su momento existió entre la legislación mexicana y los estándares interamericanos. Por lo tanto, se considera respetuosamente que no resulta necesario que esta Corte se pronuncie sobre dicha incompatibilidad en el presente caso, al haberse ya subsanado por el Estado.

16. Ahora bien, de conformidad con el derecho internacional general y la jurisprudencia de esa Corte IDH, las medidas de reparación que establezca un tribunal internacional deben tener relación con la violación de derechos humanos que se ha determinado en un caso en concreto.

17. En este sentido, el presente asunto versa sobre el conocimiento que tuvo el fuero militar de **un caso en el que las víctimas eran civiles**. Precisamente, la modificación del Código de

Justicia Militar señala, en su sentido literal, que el fuero militar no puede juzgar casos en los que la víctima sea una persona civil.

18. En este sentido, la controversia sobre si el Código de Justicia Militar debe también prohibir literalmente el juzgamiento de violaciones de derechos humanos en contra de militares por parte del fuero militar, **escapa enteramente de los hechos del presente caso**, por lo que, en dado caso, esa Corte IDH se encontraría limitada para dictar una sentencia y medidas de reparación que vayan en este sentido.

19. Como información complementaria, el Estado mexicano desea externar que derivado de la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, se cuenta con las siguientes cifras como evidencia de la debida implementación de la reforma mencionada, en las cuales se reflejan las investigaciones declinadas por parte del fuero militar en favor del fuero civil:

- De diciembre de 2006 a la fecha, el fuero militar ha declinado **un total de 1506 averiguaciones previas**.
- De junio de 2016 a la fecha se han declinado **193 carpetas de investigación**.

b) Respuesta a las preguntas de su Excelencia, el Juez Sierra Porto.

20. En relación con la pregunta hecha por el Honorable Juez Sierra Porto respecto a la solicitud hecha a la Representación y la Comisión de clarificar el estándar de responsabilidad que pretenden hacer valer, el Estado mexicano se permite pronunciar que la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder y órgano de éste, que sean violatorios de los derechos y obligaciones contenidos, en el caso concreto, en la Convención Americana²⁴.

21. Esta misma Corte IDH ha puntualizado que la protección internacional de los derechos

²⁴ Corte IDH. *Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 224; Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 164.

humanos no debe confundirse con la justicia penal, toda vez que el Derecho Internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones²⁵.

22. En esa tesitura, es importante destacar que para establecer una violación de derechos humanos, no se requiere determinar, como en el derecho penal, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, ni es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios²⁶.

23. Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, [...] *es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos*²⁷. *La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre desaparición forzada, ya que esta forma de violación se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar la detención, el paradero y la suerte de las víctimas*²⁸.

24. Asimismo, de conformidad con la vasta jurisprudencia interamericana, la Corte IDH no es un tribunal penal en el que pueda determinarse la responsabilidad penal de los individuos²⁹. Por lo tanto es obligación de los Estados investigar los hechos y sancionar a los responsables de

²⁵ Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 134.

²⁶ Corte IDH. *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 91; Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 162.

²⁷ *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 129, y *Caso Galindo Cárdenas y otros vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de octubre de 2015. Serie C No. 301, párr. 7.

²⁸ *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 131, y *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 21.

²⁹ Corte IDH. *Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 280; Corte IDH, *Caso Suárez Rosero vs. Ecuador*, Fondo, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr. 37; Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 162.

un delito que constituye una violación de derechos humanos³⁰.

25. Al respecto, en el caso *Cruz Sánchez y otros vs. Perú*, los representantes manifestaron que el Estado peruano no había llevado a cabo algunas diligencias para determinar la posible participación de militares e incluso para determinar la responsabilidad del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori³¹.

26. En respuesta, la Corte reiteró que es obligación de los Estados llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, orientada a la determinación de la verdad y al eventual enjuiciamiento y en su caso castigo de los autores de los hechos³², recordando que dicha obligación es de medio o comportamiento, razón por la cual no es incumplida por el solo hecho de que la investigación produzca un resultado satisfactorio³³.

27. En ese sentido, la Corte concluyó que corresponde a las autoridades internas competentes investigar o continuar investigando y, en su caso, determinar lo correspondiente³⁴.

28. Al margen de lo anterior, esa Honorable Corte deberá considerar que las responsabilidades penales individuales de los culpables de los hechos escapan de su jurisdicción, toda vez que no tiene competencia para pronunciarse respecto de la responsabilidad penal

³⁰ Corte IDH. *Caso Huilca Tecse vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C No. 121, párr. 105; Corte IDH. *Caso Nogueira de Varvalho y otros vs. Brasil*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 80; Corte IDH. *Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 225

³¹ Corte IDH, *Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de abril de 2015, Serie C No. 292, párrs. 417 y 419.

³² Corte IDH, *Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de abril de 2015, Serie C No. 292, párr. 421

³³ Corte IDH, *Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de abril de 2015, Serie C No. 292, párr. 422; Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*, Fondo. Sentencia de 29 julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177; Corte IDH, *Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia*, Fondo, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 58; Corte IDH, *Caso Castillo González y otros vs. Venezuela*, Fondo, Sentencia de 27 de noviembre de 2012, Serie C No. 256, párr. 153.

³⁴ Corte IDH, *Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de abril de 2015, Serie C No. 292, párr. 424; Corte IDH. *Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 378.

individual, cuestión que es de la exclusiva competencia del Estado mexicano.

29. Por lo tanto, a la luz del estándar necesario para determinar la responsabilidad del Estado (el cual es distinto a aquél para establecer responsabilidades penales), se considera que en el presente caso no existe *prueba circunstancial, indicios o presunciones para fundar una sentencia condenatoria para el Estado, y no se infieren conclusiones consistentes sobre los hechos, en torno a una supuesta desaparición forzada atribuible al Estado.*

III. PETITORIOS

30. Por lo anteriormente expuesto, el Estado mexicano solicita a la Corte IDH:

- a) *Que* tenga por presentadas las observaciones y alegatos finales del Estado;
- b) *Que* considere el contexto presentado por el Estado mexicano al momento de analizar la supuesta existencia de una desaparición forzada;
- c) *Que* considere las pruebas y observaciones presentadas por el Estado mexicano;
- d) *Que* se desestimen las pruebas y declaraciones pertinentes en los términos expresados en el presente;
- e) *Que* tome en consideración el reconocimiento de responsabilidad expresado por el Estado, y la manera en que éste ha subsanado dichos actos.
- f) *Que* determine que el Estado no es responsable por la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera.
- g) *Que* determine que el Estado no es responsable por las otras violaciones de derechos humanos conexas, alegadas por la CIDH y la representación.
- h) *Que* evalúe las investigaciones a cargo del Estado a la luz de la complejidad del caso.
- i) *Que* de manera alternativa, tome en cuenta las observaciones del Estado en torno a las reparaciones solicitadas.

IV. ANEXOS.

- Anexo 1: Informe presentado por el Estado mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas referente a 2014
- Anexo 2: Informe presentado por el Estado mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas referente a 2015
- Anexo 3: Informe presentado por el Estado mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas referente a 2016
- Anexo 4: Informe presentado por el Estado mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas referente a 2018